



Colegio de Estudios
Superiores de Administración

**Cómo el sector privado puede contribuir a cumplir la finalidad del estado de asegurar el
acceso, calidad y equidad en la educación básica para todos en Colombia**

Autora

Valentina Guerrero Vélez

Administración de empresas

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

Trabajo de Grado

Bogotá

2026

**Cómo el sector privado puede contribuir a cumplir la finalidad del estado de
asegurar el acceso, calidad y equidad en la educación básica para todos en Colombia**

Autora

Valentina Guerrero Vélez

Director

Alfredo Contreras

Administración de empresas

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

Trabajo de Grado

Bogotá

2026

Contenido

Resumen.....	8
Introducción	9
1. Problema de investigación	11
1.1 Planteamiento del problema	11
1.2 Pregunta de investigación.....	16
1.3 Justificación de la investigación.....	16
2. Objetivos	20
2.1 Objetivos Generales	20
2.2 Objetivos Específicos.....	20
3. Hipótesis	21
4. Revisión de Literatura.....	24
4.1 Marco Teórico	24
4.1.1 Participación del sector privado en la educación pública.....	28
4.1.2 Acceso, calidad y equidad en la educación	31
4.1.3 Síntesis.....	32
4.2 Estado del arte	33
5. Metodología	40
5.1 Tipo de Investigación	41
5.2 Enfoque de la Investigación	41
5.3 Diseño de la Investigación	42

5.3.1 Fase 1: Diagnóstico y análisis documental.....	42
5.3.2 Fase 2: Recolección de datos mediante encuesta	43
5.3.3 Fase 3: Análisis de datos y construcción del modelo de resultados	45
6. Resultados	47
6.1 Caracterización de la muestra	47
6.2 Confiabilidad del instrumento	50
6.3 Resultados descriptivos por dimensión	53
6.3.1 Dimensión de acceso a la educación (P1 a P4)	55
6.3.2 Dimensión de calidad educativa (P5 a P8)	56
6.3.3 Dimensión de equidad educativa (P9 a P11)	57
6.3.4 Dimensión del papel del sector privado (P12 a P14).....	57
6.4 Análisis comparativo entre grupos	59
6.4.1 Calidad educativa según tipo de institución	59
6.4.2 Calidad educativa según zona geográfica.....	60
6.4.3 Percepción de igualdad de oportunidades según nivel socioeconómico	61
6.5 Análisis de correlación entre percepción del sector privado y apoyo a las alianzas	63
Conclusiones	67
Recomendaciones	71
Referencias.....	75

Tabla de tablas

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de la muestra.....	48
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los ítems del instrumento.....	52
Tabla 3. Distribución porcentual de respuestas y estadísticos descriptivos por ítem ..	54
Tabla 4. Prueba U de Mann-Whitney: calidad educativa general (P7) según tipo de institución.....	60
Tabla 5. Prueba U de Mann-Whitney: calidad educativa general (P7) según área geográfica.....	61
Tabla 6. Prueba de Kruskal-Wallis: percepción de igualdad de oportunidades (P9) según nivel socioeconómico	62
Tabla 7. Resumen del análisis de correlación de Pearson entre P13 y P14	64
Tabla 8. Matriz de correlaciones entre variables clave del instrumento.....	65

Tabla de Figuras

Figura 1. Distribución de participantes por grupo de edad.....	47
Figura 2. Resumen visual de la distribución porcentual de respuestas por ítem	59

Tabla de Anexos

Anexo 1. Encuesta	79
-------------------------	----

Resumen

Esta investigación examina cómo el sector privado puede contribuir a que el Estado colombiano garantice el acceso, la calidad y la equidad en la educación básica y media. A partir de la revisión de experiencias nacionales e internacionales —entre ellas el programa PACES, los colegios en concesión en Bogotá, el modelo de vouchers en Suecia y el análisis sistemático de alianzas público-privadas en doce países— se identificó que la colaboración entre el Estado y actores privados puede mejorar los resultados educativos cuando existe un marco regulatorio claro, transparencia y rendición de cuentas. Esta evidencia documental fue complementada con una encuesta aplicada a 207 personas de distintas edades, tipos de institución y zonas geográficas del país. Los resultados muestran que el 87% de los encuestados rechaza la igualdad de oportunidades educativas en Colombia, el 85% percibe una brecha significativa entre colegios públicos y privados, y el 87,4% respalda las alianzas público-privadas como estrategia de mejora. El estudio concluye que la participación privada, bajo regulación estatal sólida, representa una vía viable para fortalecer el sistema educativo sin reemplazar al Estado como garante del derecho a la educación.

Introducción

La educación constituye uno de los pilares sobre los que se sostiene el desarrollo económico, social y democrático de cualquier sociedad. En Colombia, pese a los avances

logrados en materia de cobertura escolar durante las últimas décadas, persisten brechas profundas en acceso, calidad y equidad que afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables del país. Estas desigualdades no son nuevas ni circunstanciales: se manifiestan en las diferencias de desempeño entre regiones, entre zonas urbanas y rurales, y entre instituciones públicas y privadas, y tienen consecuencias directas sobre las posibilidades de movilidad social y de desarrollo del capital humano nacional.

Diversos estudios han documentado que los estudiantes de instituciones educativas públicas obtienen, en promedio, resultados significativamente inferiores en pruebas estandarizadas frente a sus pares del sector privado, además de enfrentar mayores tasas de deserción y menores probabilidades de acceder a la educación secundaria. Estas brechas no obedecen únicamente a carencias de infraestructura o recursos materiales, sino que reflejan problemas estructurales más complejos: discontinuidades en la política educativa, debilidades en la gestión institucional y desigualdades socioeconómicas históricas que el sistema, lejos de corregir, tiende a reproducir.

Ante este panorama, la presente investigación parte de una pregunta que ha ganado relevancia tanto en el debate académico como en la discusión de política pública: ¿de qué forma puede el sector privado contribuir a que el Estado cumpla su función de garantizar el acceso, la calidad y la equidad en la educación básica para todos en Colombia? Para abordarla, el estudio analiza distintos mecanismos de participación privada —alianzas público-privadas, programas de responsabilidad social empresarial, modelos de financiamiento compartido y

sistemas de becas— y examina su potencial para fortalecer el sistema educativo sin desplazar al Estado de su rol como garante principal del derecho a la educación.

Metodológicamente, la investigación adoptó un enfoque predominantemente cuantitativo, complementado con análisis documental de fuentes secundarias. Se realizó una revisión de literatura académica, informes institucionales y estadísticas oficiales sobre el sistema educativo colombiano, y se aplicó una encuesta estructurada con escala Likert a 207 personas de distintas edades, tipos de institución educativa y zonas geográficas del país. La decisión de ampliar la encuesta más allá de la Generación Z respondió al reconocimiento de que las problemáticas de acceso, calidad y equidad en la educación básica han atravesado a múltiples generaciones de colombianos, y que comprender esa diversidad de perspectivas enriquece el análisis.

El documento está organizado en seis secciones principales. La primera presenta el problema de investigación, su planteamiento, la pregunta que lo guía y la justificación del estudio. La segunda formula los objetivos del trabajo. La tercera expone las hipótesis de investigación. La cuarta desarrolla la revisión de literatura, que comprende el marco teórico y el estado del arte sobre participación privada en educación. La quinta describe la metodología empleada. La sexta presenta los resultados del análisis estadístico de la encuesta. Finalmente, el documento cierra con las conclusiones, las recomendaciones derivadas del estudio y las referencias bibliográficas.

1. Problema de investigación

1.1 Planteamiento del problema

En América Latina, y particularmente en Colombia, la educación presenta deficiencias estructurales que impactan directamente la calidad del aprendizaje y la movilidad social. Mientras que en países europeos y nórdicos la educación pública es mayoritaria y comparable en calidad con la privada, en Colombia existe una amplia brecha: los estudiantes de colegios públicos obtienen consistentemente peores resultados en pruebas estandarizadas y muestran mayores tasas de deserción escolar (Banco Mundial, 2024; UNESCO, 2020).

Por ejemplo, un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) con datos del ICFES indicó que en 2019 los estudiantes de colegios privados sacaron en promedio 25 puntos más que los de colegios oficiales; esa diferencia subió a 29,5 puntos en 2020 y a 32 puntos en 2021 (LEE citado en El Colombiano, 2022). En algunas regiones la brecha es aún más pronunciada: en el Amazonas los colegios privados superaron en 86 puntos los puntajes de sus pares oficiales; en Quindío la diferencia fue de 62 puntos, en Bolívar de 51 y en La Guajira de 50 puntos (LEE citado en El Colombiano, 2022).

En las zonas urbanas de Colombia, un niño de diez años en una escuela pública tiene treinta puntos porcentuales menos de probabilidad de comprender un texto simple en comparación con un estudiante de una escuela privada (Banco Mundial, 2024). En las áreas rurales la situación es aún más grave: la tasa de deserción escolar en educación secundaria alcanzó el 6,7 % en 2022, frente al 3,3 % en zonas urbanas (Congreso Visible, 2022). Además, el analfabetismo en el campo continúa siendo significativamente superior al de las ciudades: el

12,5 % de la población rural mayor de quince años no sabe leer ni escribir, mientras que en contextos urbanos como Bogotá esta cifra apenas llega al 4,3 % (El Colombiano, 2015).

Estas limitaciones no solo reflejan carencias materiales e infraestructurales, sino también desigualdades históricas en el acceso y la calidad educativa. La magnitud de este problema radica en que limita la movilidad social, perpetúa ciclos de pobreza y disminuye la capacidad del país para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible (Fernández, 2025). En lugar de cerrar brechas, el sistema educativo colombiano muchas veces las reproduce: los jóvenes de familias de menores ingresos asisten a instituciones con menos recursos, lo que disminuye sus posibilidades de acceder a educación superior y de mejorar su calidad de vida mediante empleos dignos y estables.

Las causas del bajo desempeño de la educación pública en Colombia son múltiples y pueden agruparse en tres grandes categorías: económicas y técnicas, sociales y culturales, y políticas.

En primer lugar, desde el punto de vista económico y técnico, aunque la inversión pública en educación ha aumentado en los últimos años, sigue siendo ineficiente. Se estima que hasta un 17 % de los recursos se desperdicia en adquisiciones mal gestionadas y un 14 % en salarios sin resultados proporcionales en calidad, lo que equivale aproximadamente al 0,27 % del PIB regional (Ortiz, 2024). Este panorama sugiere que el problema no solo radica en la cantidad de recursos disponibles, sino también en la manera en que estos son administrados.

En segundo lugar, desde el ámbito social y cultural, la percepción generalizada de que la educación pública es de “menor calidad” desalienta la confianza de las familias y genera migración hacia colegios privados en la medida de las posibilidades económicas. Esto acentúa la segregación educativa, pues quienes no pueden costear alternativas privadas permanecen en instituciones con condiciones más precarias (UNESCO, 2020).

Por último, desde la dimensión política, la falta de continuidad en las políticas públicas educativas, junto con procesos de contratación docente ineficientes y poca formación continua, limita la profesionalización de los maestros (Banco Mundial, 2024). Asimismo, el modelo estatal se ha centrado en la construcción de instituciones públicas con baja autonomía de gestión, en lugar de promover un sistema que incentive mejoras de calidad en todas las instituciones.

Estas causas interactúan de manera compleja: no se trata únicamente de la falta de dinero o infraestructura, sino también de problemas de gestión, de percepción social y de políticas poco sostenibles en el tiempo.

Si el problema persiste, las consecuencias se manifiestan a corto, mediano y largo plazo.

En el corto plazo, los estudiantes de colegios públicos enfrentan bajos niveles de aprendizaje, altas tasas de repitencia y deserción escolar, lo que disminuye la motivación de los jóvenes y genera frustración en sus familias.

En el mediano plazo, muchos de estos jóvenes se gradúan con baja empleabilidad, limitada capacidad para acceder a la educación superior y menores oportunidades laborales dignas, lo que se traduce en mayor vulnerabilidad socioeconómica.

En el largo plazo, la perpetuación de los ciclos de pobreza es casi inevitable: la brecha entre quienes acceden a colegios privados y quienes permanecen en colegios públicos se amplía, y esto genera impactos negativos en la cohesión social y en la competitividad del país frente a contextos internacionales (Angrist, Bettinger, Bloom, King & Kremer, 2002).

En general, la desigualdad en el acceso a una educación de calidad produce impactos sociales y económicos profundos: menor capital humano, incremento en la informalidad laboral y debilitamiento del tejido social (Banco Mundial, 2024).

Aunque existen múltiples estudios que documentan las deficiencias estructurales de la educación pública y comparan los resultados entre colegios públicos y privados en Colombia, persisten vacíos significativos en la literatura sobre modelos alternativos de provisión y financiamiento en los niveles de educación básica y media.

La mayor parte de las investigaciones se ha centrado en medir brechas de desempeño, cobertura o infraestructura, pero hay poca evidencia sobre cómo el sector privado puede participar en la garantía del derecho a la educación sin reemplazar al Estado como garante principal.

Un antecedente relevante dentro del contexto colombiano es el Programa de Ampliación de Cobertura en Educación Secundaria (PACES), implementado por el Ministerio de Educación Nacional durante la década de 1990. Este programa otorgaba subsidios a estudiantes de bajos recursos para acceder a instituciones educativas privadas de educación secundaria, ampliando así la cobertura escolar y fomentando la articulación entre el sector público y el privado. La evaluación realizada por Angrist et al. (2002) reportó que los beneficiarios del programa presentaron mayores tasas de finalización de la educación secundaria y mejores resultados académicos en comparación con estudiantes que no participaron. Aunque PACES se enfocó en el nivel secundario y no en la educación básica primaria, constituye un referente directo para esta investigación, pues muestra cómo un mecanismo de financiamiento estudiantil mediante alianza público-privada puede ampliar el acceso de poblaciones vulnerables a instituciones educativas de mejor calidad. La presente investigación busca explorar la viabilidad de extender este tipo de mecanismos al conjunto de la educación básica y media.

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional (2022), en su nota técnica Alianzas público-privadas en educación, reconoce la relevancia de la cooperación entre el Estado y los

actores privados como una vía para fortalecer la calidad, la gestión y la cobertura educativa. Sin embargo, también advierte que la evidencia sobre la implementación, resultados e impacto de estas alianzas en Colombia sigue siendo limitada, especialmente en lo relacionado con educación básica y media. Esto demuestra la necesidad de profundizar en investigaciones que analicen de forma empírica cómo dichas alianzas podrían estructurarse, financiarse y evaluarse dentro del marco constitucional que asigna al Estado el deber de asegurar el acceso a la educación, pero no necesariamente de proveerla directamente.

Un caso internacional relevante es el sistema de vouchers educativos implementado en Suecia en 1992, que permitió a las familias elegir entre escuelas públicas y privadas mediante un subsidio estatal. Este modelo buscaba aumentar la competencia entre las instituciones educativas y ofrecer a los padres mayor libertad de elección. La evidencia empírica sobre los efectos de este sistema es mixta. Por un lado, algunos estudios indican que la competencia generada por el sistema de vouchers llevó a una mejora en la calidad educativa en ciertas áreas; por otro lado, también se han observado efectos negativos, como el aumento de la segregación escolar y una disminución en los puntajes de las pruebas PISA en los años posteriores a su implementación. Este caso sueco resulta relevante para la investigación, ya que ofrece un ejemplo concreto de cómo un sistema de vouchers puede funcionar en la práctica, con sus ventajas y desventajas. Además, proporciona lecciones valiosas sobre el diseño e implementación de políticas educativas que buscan combinar la participación del sector privado con la garantía del derecho a la educación por parte del Estado.

En síntesis, el vacío de información radica en la escasez de estudios recientes y aplicados que examinen la viabilidad y los efectos de esquemas de colaboración entre el Estado y el sector privado para garantizar el acceso universal y equitativo a la educación básica

primaria. La literatura existente ofrece antecedentes valiosos —como PACES en educación secundaria, las primeras aproximaciones del Ministerio de Educación y el caso sueco—, pero no aborda con suficiente profundidad cómo trasladar estos aprendizajes al nivel de educación básica primaria, donde la presencia del sector privado en programas de financiamiento estudiantil sigue siendo marginal. Por ello, esta investigación busca aportar evidencia y reflexión sobre nuevos modelos de colaboración que permitan al Estado cumplir su función de garante del derecho a la educación, apoyándose estratégicamente en la participación del sector privado.

Por lo anterior, se definió la siguiente pregunta de investigación.

1.2 Pregunta de investigación

¿De qué forma el sector privado puede contribuir a cumplir la finalidad del Estado de asegurar el acceso, la calidad y equidad en la educación básica para todos en Colombia?

1.3 Justificación de la investigación

El problema planteado tiene gran relevancia tanto para el sector real como para la academia, dado que la educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y cultural de cualquier nación. En el contexto colombiano, la baja calidad de la educación pública no solo afecta el presente de los niños y jóvenes, sino que compromete el futuro de toda la sociedad. En este sentido, la investigación resulta necesaria porque busca contribuir a la construcción de soluciones que permitan transformar un sistema que, en su estado actual, perpetúa desigualdades y limita la movilidad social.

Desde la perspectiva social, el estudio se justifica porque la educación básica es un derecho fundamental y, al mismo tiempo, un instrumento para alcanzar otros derechos. Cuando el acceso es desigual o la calidad está comprometida, se generan círculos viciosos que impactan

la equidad, la cohesión social y la estabilidad democrática. En Colombia, los altos índices de deserción escolar y las brechas entre lo público y lo privado no solo afectan a las familias directamente involucradas, sino que repercuten en el conjunto de la sociedad al reproducir la pobreza y limitar las oportunidades de desarrollo comunitario. La investigación, por tanto, adquiere valor en la medida en que explora mecanismos para que el Estado cumpla efectivamente su función de garantizar el acceso a la educación, sin necesariamente asumir de manera exclusiva la prestación del servicio.

Desde la perspectiva económica, el tema es prioritario porque la calidad de la educación incide directamente en la productividad y en la capacidad del país para competir en un mundo globalizado. Un sistema educativo desigual forma capital humano insuficiente para responder a los retos del mercado laboral contemporáneo, caracterizado por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Países que han logrado mejorar su educación pública, como Finlandia o Suecia, muestran cómo la inversión eficiente en educación genera retornos económicos de largo plazo. En el caso colombiano, investigar alternativas que incluyan la participación del sector privado podría abrir caminos hacia un uso más eficaz de los recursos y una oferta educativa que prepare mejor a los ciudadanos para las demandas de la economía del futuro.

Desde la perspectiva política y de gestión pública, la investigación se justifica porque permite analizar los límites y alcances del papel del Estado en la educación. La Constitución establece que es deber del Estado asegurar el acceso a la educación básica, pero no define que deba ser el único proveedor. En este marco, cobra relevancia explorar cómo la colaboración con el sector privado puede contribuir a cumplir esta finalidad. Este enfoque no pretende debilitar el rol del Estado, sino fortalecerlo mediante la búsqueda de modelos más eficientes de

gestión que diversifiquen la oferta, eleven la calidad y garanticen inclusión. A su vez, esta discusión puede alimentar la formulación de políticas públicas más sostenibles, orientadas a resultados y con mayor impacto en la vida de las comunidades.

Desde la perspectiva académica, el estudio contribuye a un campo que aún cuenta con vacíos de información. Aunque existen múltiples investigaciones sobre la calidad de la educación en Colombia, pocas han abordado en detalle el papel que puede desempeñar el sector privado en el cumplimiento de los fines estatales. Analizar esta relación desde una mirada comparada con experiencias internacionales y aterrizada al contexto colombiano no solo aporta a la literatura académica, sino que ofrece evidencia útil para futuros proyectos de investigación, debates legislativos y discusiones en el ámbito social.

Finalmente, la investigación se justifica porque puede tener un impacto práctico en la formulación de soluciones innovadoras. Identificar cómo el sector privado puede aportar —ya sea a través de la creación de instituciones, programas de becas, alianzas público-privadas, modelos pedagógicos innovadores o mecanismos de evaluación de calidad— no solo complementa la acción estatal, sino que amplía el abanico de alternativas disponibles para mejorar la educación en el país. En un contexto en el que los recursos públicos son limitados y las necesidades sociales son crecientes, resulta crucial generar evidencia que sustente nuevas formas de cooperación entre diferentes actores.

Esta necesidad de explorar soluciones innovadoras encuentra un referente en experiencias colombianas de colaboración público-privada, aunque se desarrollen predominantemente en el ámbito de la educación superior. Entidades como Colfuturo demuestran la viabilidad de modelos de cofinanciamiento y gestión público-privada para la formación de capital humano calificado (Colfuturo, s.f.). Su éxito en la articulación de recursos y voluntades de diferentes actores sirve como un valioso antecedente para explorar cómo

esquemas de financiación de estudios o acceso a oportunidades pueden ser adaptados y contextualizados para abordar las deficiencias en la educación básica.

Asimismo, la participación de fundaciones empresariales como la Fundación Bolívar-Davivienda evidencia el potencial de la inversión privada y la responsabilidad social corporativa para complementar los esfuerzos estatales en el desarrollo educativo (Fundación Bolívar-Davivienda, s.f.). Aunque sus programas puedan tener un enfoque distinto, ilustran la capacidad del sector privado para generar alternativas, impulsar programas de becas e infraestructura, y contribuir a un ecosistema educativo más robusto. Estos ejemplos concretos en el contexto colombiano subrayan la pertinencia de la presente investigación al buscar mecanismos que permitan escalar estas sinergias y lecciones hacia la educación básica, garantizando acceso, calidad y equidad.

En conclusión, la relevancia de esta investigación radica en que aborda un problema estructural y persistente en Colombia, con repercusiones en múltiples niveles, desde la equidad social hasta la competitividad económica y la construcción de ciudadanía. Este estudio, al centrar su atención en el rol complementario y de apoyo que puede cumplir el sector privado para el Estado, y basándose en la existencia de modelos exitosos de colaboración en el país, abre un espacio de discusión fundamental para repensar la manera en que se garantiza el acceso universal y equitativo a la educación básica, un derecho y motor de desarrollo humano.

2. Objetivos

2.1 Objetivos Generales

Analizar las formas en que el sector privado puede contribuir para asegurar el acceso, la calidad y la equidad en la educación colombiana, identificando mecanismos y estrategias que permitan fortalecer la colaboración público-privada en el sistema educativo nacional, con el fin de proponer modelos viables que contribuyan a la formación integral de los ciudadanos y al desarrollo social del país.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las principales barreras y desafíos que enfrenta la educación colombiana en términos de acceso, calidad y equidad, y cómo el sector privado puede intervenir para mitigarlos.
- Examinar experiencias nacionales e internacionales de colaboración entre el sector público y privado en educación, evaluando sus resultados y lecciones aprendidas.
- Analizar las percepciones y expectativas de actores clave (familias, educadores, autoridades y empresarios) sobre el rol del sector privado en la educación.
- Proponer recomendaciones y modelos de colaboración público-privada que permitan optimizar la contribución del sector privado en la educación colombiana, garantizando la supervisión estatal y la inclusión social.

3. Hipótesis

A continuación, se presentan las hipótesis formuladas para esta investigación, las cuales establecen la relación entre la variable 1, correspondiente a la participación del sector privado en la educación pública, y la variable 2, que comprende la calidad, la equidad y el acceso educativo en Colombia. Estas hipótesis se construyen sobre dos fuentes complementarias de evidencia: por un lado, la literatura académica nacional e internacional y las experiencias documentadas de colaboración público-privada en educación; por otro, los datos primarios recogidos mediante una encuesta de percepción aplicada a 207 personas en Colombia. Mientras la primera fuente aporta fundamento empírico sobre el funcionamiento de estos mecanismos en distintos contextos, la segunda permite explorar en qué medida los colombianos respaldan y valoran estas formas de colaboración, lo que constituye una condición necesaria para su viabilidad social y política.

Relación entre variables: se plantea que la participación del sector privado en la educación pública (variable independiente) puede contribuir positivamente al acceso, la calidad y la equidad educativa (variable dependiente) a través de tres mecanismos fundamentales, respaldados tanto por la literatura como por las percepciones de los encuestados:

1. Financiamiento complementario, que mejora la infraestructura, la cobertura y los recursos pedagógicos disponibles, tal como lo demuestran experiencias como Colfuturo en Colombia y el programa Punjab Education Foundation en Pakistán.
2. Innovación en gestión y metodologías, que incrementa la eficiencia institucional y los aprendizajes medibles, como lo evidencian los colegios en concesión en Bogotá (López et al., 2017) y los modelos de alianza en Brasil y Corea del Sur (Sajida y Kusumasari, 2023).

3. Responsabilidad social empresarial, orientada a reducir brechas territoriales y sociales mediante programas educativos sostenibles.

H1. La participación del sector privado en la educación pública, mediante alianzas estratégicas, financiamiento compartido e innovación pedagógica, puede fortalecer la calidad y la equidad educativa en Colombia, siempre que exista regulación estatal, rendición de cuentas y alineación con los objetivos del sistema educativo público.

H2. La implementación de modelos de colaboración público-privada que contemplen mecanismos de financiamiento estudiantil —becas, subsidios o sistemas de cofinanciamiento similares a los vouchers educativos— puede ampliar el acceso a instituciones de mejor calidad y reducir las brechas territoriales y socioeconómicas en la educación básica, bajo un marco activo de supervisión estatal.

H3. La participación del sector privado en la formación docente y la promoción de la innovación pedagógica puede asociarse con mejoras en los resultados académicos y en la permanencia escolar, especialmente en zonas rurales y contextos vulnerables, dentro de un marco regulatorio que garantice inclusión y transparencia.

H4. La contribución del sector privado a la infraestructura educativa y la dotación tecnológica puede asociarse positivamente con una mejora en las condiciones de aprendizaje y con la reducción de brechas entre instituciones públicas y privadas y entre zonas urbanas y rurales.

Estas hipótesis se construyen sobre dos fuentes complementarias de evidencia: la literatura académica nacional e internacional sobre colaboración público-privada en educación, y los datos primarios recogidos mediante una encuesta de percepción aplicada a 207 personas en Colombia. Mientras la primera fuente aporta fundamento empírico sobre el funcionamiento de estos mecanismos en distintos contextos —como los colegios en concesión en Bogotá

(López et al., 2017), el programa PACES (Angrist et al., 2002) y la revisión sistemática de Sajida y Kusumasari (2023) en doce países—, la segunda permite explorar en qué medida los colombianos respaldan estas formas de colaboración, condición necesaria para su viabilidad social y política.

4. Revisión de Literatura

La educación pública en Colombia enfrenta desafíos persistentes en cobertura, calidad y equidad, a pesar de estar reconocida como un derecho fundamental en la Constitución. Los esfuerzos estatales no han logrado garantizar igualdad de oportunidades, lo que ha motivado el debate sobre el papel que puede desempeñar el sector privado como aliado estratégico del Estado en la garantía del derecho a la educación.

En este sentido, la pregunta que guía esta revisión es: ¿de qué forma el sector privado puede contribuir a cumplir la finalidad del Estado de asegurar el acceso, la buena calidad y equidad en la educación básica para todos en Colombia?

Esta revisión de literatura se centra en dos variables principales: la participación del sector privado en la educación pública y la calidad y equidad educativa. La primera abarca las distintas formas en que empresas, fundaciones y organizaciones privadas aportan recursos, gestión o innovación pedagógica al sistema educativo; la segunda aborda los resultados del sistema público en términos de acceso, desempeño académico y reducción de brechas.

El análisis se sustenta en evidencia empírica y conceptual reciente, con el objetivo de identificar cómo la cooperación público-privada puede consolidarse como una estrategia sostenible para fortalecer la educación pública en Colombia.

4.1 Marco Teórico

La educación es ampliamente reconocida en la literatura académica como uno de los principales determinantes del desarrollo económico, la movilidad social y la reducción de desigualdades. En este sentido, los sistemas educativos no solo cumplen una función formativa, sino que también constituyen un mecanismo fundamental para la construcción de capital

humano y la consolidación de sociedades más equitativas. Diversos organismos internacionales han señalado que el acceso universal a una educación de calidad es un componente esencial para el desarrollo sostenible y la estabilidad social (UNESCO, 2020).

En el caso colombiano, la educación básica se encuentra reconocida como un derecho fundamental y como una responsabilidad del Estado. No obstante, la garantía efectiva de este derecho enfrenta desafíos estructurales relacionados con el acceso, la calidad y la equidad del sistema educativo. Aunque en las últimas décadas se han logrado avances importantes en términos de cobertura, la evidencia muestra que persisten brechas significativas entre regiones, entre zonas urbanas y rurales y entre instituciones públicas y privadas. Estas desigualdades se traducen en diferencias en resultados académicos, oportunidades educativas y trayectorias laborales futuras (Banco Mundial, 2024).

Dentro del debate sobre cómo mejorar el desempeño de los sistemas educativos, uno de los enfoques que ha ganado relevancia en las últimas décadas es el análisis del papel que pueden desempeñar actores no estatales en la provisión y fortalecimiento de la educación. Tradicionalmente, el Estado ha sido considerado el principal responsable de garantizar el acceso a la educación; sin embargo, la literatura contemporánea reconoce que el sector privado puede desempeñar un rol complementario en la provisión de servicios educativos, especialmente en contextos donde existen limitaciones fiscales, institucionales o administrativas.

Desde esta perspectiva, la participación del sector privado en la educación puede adoptar diversas formas, que van desde la creación y gestión de instituciones educativas hasta la financiación de programas, el desarrollo de infraestructura, la innovación pedagógica o la implementación de programas de responsabilidad social empresarial orientados a mejorar las oportunidades educativas. Estas formas de participación no necesariamente implican una

sustitución del Estado, sino que pueden configurarse como mecanismos de colaboración que buscan fortalecer la capacidad del sistema educativo para cumplir sus objetivos sociales.

Uno de los argumentos centrales a favor de la participación del sector privado se relaciona con su potencial para introducir mayor eficiencia en la gestión de recursos y promover procesos de innovación. En algunos casos, las organizaciones privadas cuentan con mayor flexibilidad administrativa y capacidad para experimentar con modelos pedagógicos, estrategias de gestión o mecanismos de financiamiento que pueden contribuir a mejorar la calidad educativa. Sin embargo, este enfoque también ha generado debates sobre los riesgos asociados a la privatización de servicios educativos y sobre la necesidad de establecer mecanismos de regulación que garanticen la equidad en el acceso a la educación.

En este contexto, el concepto de colaboración público-privada adquiere especial relevancia. Las alianzas público-privadas en educación se entienden como acuerdos de cooperación entre el Estado y actores privados orientados a mejorar la provisión, gestión o financiamiento del servicio educativo. Según el Ministerio de Educación Nacional (2022), este tipo de alianzas pueden contribuir a ampliar la cobertura educativa, fortalecer la gestión institucional y promover innovaciones que mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje. No obstante, su efectividad depende en gran medida del diseño institucional, los mecanismos de supervisión estatal y la alineación de intereses entre los distintos actores involucrados.

Uno de los modelos más discutidos dentro de este debate es el de los sistemas de vouchers educativos. Este tipo de mecanismo consiste en la asignación de subsidios o transferencias a las familias para que puedan elegir la institución educativa en la que desean matricular a sus hijos, ya sea pública o privada. La lógica detrás de este modelo se basa en la idea de que la competencia entre instituciones educativas puede generar incentivos para mejorar la calidad del servicio educativo y ampliar las opciones disponibles para las familias.

En el contexto colombiano, uno de los antecedentes más relevantes de este tipo de políticas es el Programa de Ampliación de Cobertura en Educación Secundaria (PACES), implementado en la década de 1990. Este programa otorgaba subsidios a estudiantes de bajos recursos para que pudieran acceder a instituciones educativas privadas. La evaluación realizada por Angrist, Bettinger, Bloom, King y Kremer (2002) encontró que los beneficiarios del programa presentaron mayores tasas de finalización escolar y mejores resultados académicos en comparación con estudiantes que no participaron en el programa. Estos hallazgos sugieren que ciertos mecanismos de financiamiento que combinan recursos públicos y oferta educativa privada pueden tener efectos positivos sobre las oportunidades educativas.

Sin embargo, la evidencia internacional también muestra que este tipo de políticas puede generar efectos ambiguos si no se diseñan adecuadamente. El caso del sistema de vouchers implementado en Suecia a partir de 1992 ilustra tanto el potencial como los desafíos de este tipo de reformas. Si bien algunos estudios han señalado que la introducción de competencia entre escuelas generó incentivos para mejorar ciertos aspectos de la calidad educativa, también se han observado efectos relacionados con el aumento de la segregación escolar y cambios en el desempeño académico de los estudiantes. Este tipo de experiencias sugiere que la participación del sector privado en la educación debe analizarse con cautela y dentro de marcos regulatorios sólidos que garanticen la equidad del sistema educativo.

Otro componente relevante dentro del marco teórico es el papel de la responsabilidad social empresarial en el ámbito educativo. En distintos contextos, empresas y fundaciones privadas han desarrollado programas orientados a mejorar el acceso a la educación, fortalecer la formación docente o financiar proyectos educativos en comunidades vulnerables. En Colombia, organizaciones como Colfuturo han demostrado la viabilidad de modelos de

cofinanciamiento que combinan recursos públicos y privados para ampliar oportunidades educativas (Colfuturo, s.f.). De manera similar, iniciativas impulsadas por fundaciones empresariales han contribuido al desarrollo de programas de becas, fortalecimiento institucional e inversión en infraestructura educativa (Fundación Bolívar-Davivienda, s.f.).

Estas experiencias reflejan que el sector privado puede desempeñar un papel relevante en la generación de oportunidades educativas y en la movilización de recursos adicionales para el sistema educativo. Sin embargo, también evidencian la necesidad de establecer mecanismos de coordinación con el Estado que permitan asegurar que estas iniciativas se alineen con los objetivos de política pública y contribuyan efectivamente a la reducción de brechas educativas.

En síntesis, la literatura sobre participación del sector privado en educación sugiere que la colaboración entre el Estado y actores privados puede generar oportunidades para mejorar el acceso, la calidad y la eficiencia del sistema educativo. No obstante, también subraya la importancia de diseñar marcos institucionales que garanticen la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la implementación de estas iniciativas. En el caso colombiano, donde persisten importantes brechas educativas y limitaciones en la capacidad estatal para responder a todas las necesidades del sistema, el análisis de modelos de colaboración público-privada se presenta como un campo de estudio relevante para explorar alternativas que permitan fortalecer la garantía del derecho a la educación.

4.1.1 Participación del sector privado en la educación pública

Definición.

De acuerdo con Tilak (2016), la participación privada comprende toda forma de colaboración en la provisión o gestión de servicios educativos —desde el financiamiento hasta la administración o la innovación pedagógica— bajo control y supervisión estatal. En el ámbito

internacional, Sajida y Kusumasari (2023) muestran a través de una revisión sistemática de doce países que las alianzas público-privadas pueden compartir responsabilidades financieras y operativas entre el Estado y los actores privados, contribuyendo a optimizar recursos y mejorar la eficiencia institucional. En Uruguay, Martinis (2020) reporta que los mecanismos fiscales que incentivan donaciones empresariales han ampliado la infraestructura educativa sin debilitar la rectoría estatal.

En Colombia, experiencias como los colegios en concesión (López et al., 2017) y los análisis de calidad y costos de la educación secundaria pública y privada de Guarín, Medina y Posso (2018) ilustran modelos de cooperación público-privada orientados a mejorar resultados académicos y optimizar recursos. Sin embargo, aunque se demuestren mejoras en el ámbito académico, también han generado debates sobre la sostenibilidad, la equidad y el rol del Estado en la educación.

Dimensiones.

La participación del sector privado se puede analizar a través de cuatro dimensiones:

1. Financiera: Financiera: incluye inversión directa, becas o programas de cofinanciamiento (Guarín, Medina y Posso, 2018).
2. Gestión y gobernanza: administración compartida o delegada de instituciones educativas, como en el modelo de concesión (López et al., 2017).
3. Innovación y calidad: aportes en formación docente, tecnología o pedagogías (Tilak, 2016; Babatunde & Perera, 2023).
4. Responsabilidad social empresarial: iniciativas privadas de impacto comunitario y sostenibilidad educativa (Takmazyan et al., 2018).

Medición.

La participación privada se evalúa mediante el número de APP suscritas, los montos de inversión, la cobertura de programas mixtos y los resultados de desempeño académico asociados (Babatunde & Perera, 2023). Estudios internacionales identifican tres factores clave para el éxito de las APP en educación: un marco legal claro, transparencia en la gestión y comunicación efectiva entre los socios (PPP Success Factors, 2023).

La evidencia indica que el involucramiento del sector privado puede aumentar la eficiencia del gasto público y promover la innovación, siempre que exista una regulación sólida que garantice la equidad. El aporte financiero y técnico de las empresas, combinado con la función supervisora del Estado, constituye una vía viable para mejorar la educación pública sin privatizarla.

Modelos.

- Modelos de alianzas público-privadas (APP): En estos modelos, el Estado mantiene la rectoría y regulación, mientras que el sector privado aporta recursos financieros, gestión y tecnología para mejorar la oferta educativa. Ejemplos exitosos incluyen los colegios en concesión en Bogotá (López et al., 2017) y el sistema de vouchers en Suecia (Böhlmark et al. 2016), que permiten a las familias elegir entre instituciones públicas y privadas con subsidios estatales.
- Modelos de financiamiento compartido: Donde el sector privado contribuye con becas, infraestructura o programas de innovación, complementando la inversión pública. El programa PACES en Colombia es un antecedente en educación secundaria (MEN, 2008).

- Modelos de innovación pedagógica y formación docente: En los que el sector privado impulsa la capacitación continua, la incorporación de tecnologías y metodologías innovadoras para mejorar el aprendizaje y la permanencia escolar, especialmente en contextos vulnerables (Tilak, 2016; Babatunde & Perera, 2023).

4.1.2 Acceso, calidad y equidad en la educación

Definición

La calidad educativa se entiende como la capacidad del sistema para garantizar aprendizajes relevantes, docentes calificados, infraestructura adecuada y un entorno escolar inclusivo (Arenas, 2021). La equidad, por su parte, implica igualdad de oportunidades, asegurando que las condiciones socioeconómicas no determinen el acceso ni los resultados (Segura, Vásquez y Rosero, 2024). Diversos estudios demuestran que, en Colombia, la calidad y la equidad están condicionadas por factores estructurales como el nivel educativo de los padres, el acceso a tecnología y la ubicación geográfica (Rodríguez, Ordóñez y Hidalgo, 2021). Guarín, Medina y Posso (2018) documentan que las instituciones privadas superan en promedio a las públicas en pruebas estandarizadas, aunque esta diferencia se reduce significativamente al controlar el nivel socioeconómico de los estudiantes.

Según la UNESCO (2020), la calidad también depende de la pertinencia curricular y de la gestión escolar, mientras que la equidad se refleja en la reducción de brechas entre zonas rurales y urbanas, entre hombres y mujeres y entre sectores sociales. Por otro lado, según la UNESCO (2020), el acceso a la educación se refiere a la posibilidad efectiva de que todos los niños y jóvenes puedan ingresar y permanecer en el sistema educativo, superando barreras económicas, sociales y territoriales que limitan la cobertura educativa. El Banco Mundial (2024) enfatiza que garantizar el acceso implica no solo la matrícula, sino también la

permanencia y la finalización de los ciclos educativos, especialmente en contextos vulnerables y marginados, lo cual es muy pertinente al entender las altas tasas de deserción en Colombia.

Dimensiones.

1. Calidad del aprendizaje: resultados en pruebas estandarizadas, permanencia escolar y progresión académica (Arenas, 2021).
2. Equidad territorial: diferencias de acceso y rendimiento entre zonas urbanas y rurales (Rodríguez et al., 2021).
3. Condiciones socioeconómicas: influencia del estrato, nivel educativo de los padres y acceso a TIC (Guarín et al., 2018; Rodríguez et al., 2021).
4. Gestión institucional: liderazgo, autonomía y prácticas docentes (López et al., 2017).

Medición.

La calidad y equidad se miden mediante indicadores de logro académico (pruebas Saber), tasas de deserción y cobertura, índices de infraestructura y proporción de docentes con formación profesional. En estudios recientes, el acceso a tecnología y conectividad se reconoce como nuevo indicador de calidad (Rodríguez et al., 2021).

4.1.3 Síntesis

El marco teórico sugiere que la participación del sector privado en la educación pública, a través de financiamiento, gestión e innovación, puede complementar el rol del Estado para mejorar la calidad, equidad y acceso educativo en Colombia. La calidad, equidad y acceso son variables interrelacionadas que reflejan tanto los resultados académicos como las condiciones sociales y estructurales del sistema educativo.

Los modelos revisados muestran que la colaboración público-privada, bajo principios de regulación y transparencia, es una estrategia viable para superar las limitaciones actuales. Experiencias nacionales e internacionales aportan lecciones clave para articular esta cooperación sin perder la garantía estatal del derecho a la educación.

En suma, fortalecer la educación colombiana requiere una alianza inteligente entre Estado y sector privado que permita ampliar oportunidades, mejorar resultados y reducir brechas, contribuyendo así al desarrollo social y económico del país.

4.2 Estado del arte

Este estado del arte se centra en dos variables principales: la participación del sector privado en la educación pública y la calidad, equidad y acceso educativo. La primera variable abarca las distintas formas en que el sector privado contribuye a la educación pública, ya sea mediante financiamiento, gestión, innovación pedagógica o responsabilidad social. La segunda variable se refiere a los resultados educativos en términos de acceso, desempeño académico y reducción de brechas sociales y territoriales.

En el análisis de Friedrich (2016, Alemania), se examina cómo redes globales como Teach for All promueven alianzas público-privadas en contextos educativos con sistemas públicos débiles. Este estudio crítico revela que, aunque estas redes buscan soluciones innovadoras, pueden debilitar la educación pública al transferir decisiones clave a actores privados, generando desigualdades y problemas de rendición de cuentas. Esta reflexión es fundamental para cuestionar si la participación privada fortalece o reemplaza el sistema público, un aspecto central en nuestra investigación.

Un estudio realizado por Ingram et al. (2006, Estados Unidos) aborda el papel de las alianzas público-privadas en la reducción de brechas educativas en países en desarrollo. A

través de un análisis documental, los autores identifican que, pese a avances en matrícula, persisten millones de niños fuera del sistema y altas tasas de deserción. Proponen que la colaboración público-privada puede sumar recursos financieros y técnicos para superar estas barreras, lo que respalda la hipótesis de que el sector privado puede ser un aliado estratégico en Colombia.

Filmer, Hasan y Pritchett (2016, Uganda) presentan un estudio empírico sobre un programa de alianzas público-privadas que subsidia matrículas en escuelas privadas de bajo costo para ampliar la cobertura educativa. Mediante encuestas y análisis econométricos, demuestran que el programa aumentó el acceso y mejoró los resultados académicos, especialmente en comunidades rurales y de bajos ingresos. Este caso aporta evidencia concreta sobre el impacto positivo de la participación privada en contextos vulnerables, alineándose con los objetivos de nuestra tesis.

La revisión sistemática de Nurhaliza et al. (2025, Indonesia) explora las narrativas del abandono escolar en zonas rurales, identificando factores familiares, comunitarios y estructurales que influyen en la deserción. A través de un enfoque PRISMA, el estudio destaca cómo la falta de infraestructura y apoyo institucional limita las oportunidades educativas, perpetuando la pobreza. Este análisis sustenta la importancia de intervenciones que incluyan la participación privada para mejorar condiciones y reducir la deserción en Colombia.

En el contexto colombiano, Telch (2025) analiza cómo la planificación nacional para el desarrollo influye en las instituciones públicas y sus capacidades para implementar políticas educativas. Mediante un estudio cualitativo, se identifican desafíos en la coordinación interinstitucional y la capacidad técnica local, que afectan la sostenibilidad de las acciones educativas. Este trabajo fundamenta la necesidad de fortalecer la gestión pública y explorar alianzas con el sector privado para superar limitaciones estructurales.

Sandro Alfonso Echeverry Palacio y colaboradores (2025, Colombia) presentan un estudio de caso cualitativo sobre “Translingualand”, una propuesta de educación bilingüe no formal en colegios públicos colombianos. A través de observaciones y cuestionarios, evidencian que el uso de estrategias de translanguaging facilita la asimilación de contenidos y el desarrollo integral de los estudiantes. Este trabajo aporta una perspectiva innovadora sobre cómo mejorar la calidad educativa desde el sector público, complementando la discusión sobre la participación privada en la educación.

Aristizábal y Ávila (2025, Colombia) realizan una revisión sobre el impacto del conflicto armado en la educación, destacando cómo la violencia afecta a docentes, estudiantes y comunidades, y cómo la educación contribuye a la construcción de paz. Su análisis cualitativo resalta la doble función de la educación como víctima y agente de transformación social. Este enfoque es clave para entender la complejidad del contexto colombiano y la necesidad de alianzas público-privadas que promuevan equidad y reconstrucción social.

Suárez Mesa (2025, Colombia) utiliza análisis estadísticos para evaluar cómo la intensidad del conflicto armado afecta los resultados educativos a nivel municipal. Su estudio cuantitativo muestra que la violencia reduce el rendimiento académico y aumenta las desigualdades, incluso después del acuerdo de paz. Estos hallazgos subrayan la urgencia de modelos colaborativos que integren recursos privados para apoyar la educación en zonas afectadas por el conflicto.

Cárdenas-Támara y Bejarano (2025, Colombia) critican el discurso neoliberal en la política educativa colombiana, señalando que la priorización de la eficiencia y competencias limita la equidad y la diversidad cultural. Mediante análisis discursivo, evidencian cómo este enfoque puede reforzar brechas y reducir la participación social. Este estudio aporta un marco

crítico para analizar las políticas educativas y justificar la necesidad de modelos alternativos que incluyan la participación privada con enfoque social.

Sajida y Kusumasari (2023, Indonesia) realizan una revisión sistemática internacional sobre los factores críticos de éxito de las alianzas público-privadas en educación, analizando 21 artículos académicos que cubren experiencias en doce países, incluido el caso colombiano de los colegios en concesión en Bogotá. Su análisis identifica beneficios en infraestructura, cobertura y eficiencia institucional, así como riesgos de privatización cuando los marcos regulatorios son débiles. Las autoras destacan que la regulación clara, la rendición de cuentas y la transparencia son condiciones indispensables para garantizar que las alianzas contribuyan a la equidad. Este trabajo respalda la idea de que las APP pueden fortalecer la educación pública si se diseñan adecuadamente bajo supervisión estatal.

Takmazyan et al. (2018, Rusia) analizan las APP como mecanismo para modernizar la infraestructura educativa, combinando recursos públicos y privados. A través de análisis documental y casos prácticos, muestran beneficios económicos y sociales, así como la importancia de marcos legales claros. Este estudio internacional ofrece lecciones valiosas para Colombia en la gestión de infraestructura educativa mediante colaboración público-privada.

Arenas (2021, Colombia) investiga cómo las condiciones socioeconómicas afectan el rendimiento escolar, ajustando puntajes por nivel socioeconómico. Su estudio estadístico muestra que este ajuste reduce significativamente las brechas entre colegios, sugiriendo la importancia de políticas que consideren el contexto social. Este análisis apoya la tesis sobre la necesidad de intervenciones privadas que equilibren oportunidades.

Un estudio realizado por López, Virgüez, Silva y Sarmiento (2017, Colombia) analiza la desigualdad de oportunidades en el sistema de educación pública en Bogotá, comparando colegios públicos tradicionales y colegios en concesión gestionados por privados. Su análisis

muestra que los colegios en concesión presentan menor desigualdad y mejores resultados en pruebas Saber 11. Este trabajo ofrece evidencia empírica directa sobre los beneficios de la colaboración público-privada en la educación colombiana.

Rodríguez et al. (2021, Colombia) presentan una investigación que identifica factores que influyen en el rendimiento académico en Nariño, destacando la educación parental, el acceso a tecnologías de la información y la ubicación urbana. Utilizando modelos econométricos, analizan datos cuantitativos y sugieren que el sector privado puede apoyar con tecnología y programas de acompañamiento, contribuyendo a mejorar la calidad y equidad educativa.

En un estudio sobre la opinión pública en Estados Unidos, Su y Gelman (2023) analizan el apoyo a los vouchers escolares utilizando métodos estadísticos avanzados para identificar patrones según ingreso, religión y etnia. Los autores concluyen que la regulación es clave para evitar la segregación escolar. Este trabajo aporta una perspectiva social y política relevante para considerar la implementación de sistemas de vouchers en Colombia.

Guarín, Medina y Posso (2018, Colombia) analizan la calidad, cobertura y costos ocultos de la educación secundaria pública y privada en Colombia, mostrando que las brechas de calidad entre ambos sectores se reducen significativamente cuando se controlan factores socioeconómicos. Su análisis cuantitativo destaca las heterogeneidades regionales en el desempeño educativo y la necesidad de intervenciones diferenciadas. Este artículo complementa la discusión sobre la colaboración público-privada y su impacto en el sistema educativo colombiano.

Las investigaciones coinciden en que la cooperación público-privada mejora la gestión y los resultados educativos cuando se rige por principios de equidad y transparencia. Sin embargo, persisten vacíos en la medición del impacto de las APP sobre la equidad y en la

evaluación de su sostenibilidad a largo plazo. También se observa escasez de estudios sobre la participación empresarial en la educación básica y rural de Colombia.

Este vacío abre una oportunidad de investigación: determinar cómo el sector privado puede participar en la educación pública colombiana de manera sostenible, equitativa y regulada, contribuyendo a la calidad y a la reducción de brechas sociales. Sin embargo, también existen perspectivas críticas que advierten sobre los riesgos asociados a estas colaboraciones, estas perspectivas críticas abren la posibilidad de profundizar en las condiciones bajo las cuales la participación privada puede fortalecer el sistema educativo sin reproducir desigualdades.

La revisión de la literatura sugiere que la educación pública en Colombia podría beneficiarse de una articulación efectiva entre el Estado y el sector privado para avanzar hacia estándares de calidad y equidad más sostenibles. Las experiencias internacionales reportadas en estudios académicos indican que las alianzas bien diseñadas, con marcos normativos sólidos y mecanismos de evaluación claros, han mostrado mejoras en infraestructura, gestión y desempeño académico en distintos contextos.

En el caso colombiano, los resultados de los colegios en concesión y de algunos programas de inversión social empresarial muestran avances medibles en cobertura y calidad. No obstante, estos esfuerzos aún son fragmentados y carecen de un marco integral que los incorpore como política estructural dentro del sistema educativo.

El desafío central no es privatizar la educación, sino co-gestionarla bajo criterios de justicia social, transparencia y sostenibilidad. El Estado debe mantener su rol rector, definiendo los objetivos, regulando los procesos y garantizando la equidad, mientras el sector privado puede aportar capacidad técnica, innovación, infraestructura y recursos financieros.

La evidencia respalda la hipótesis de que la cooperación público-privada es una herramienta eficaz para avanzar hacia una educación pública más equitativa, inclusiva y de calidad. Sin embargo, para consolidarla como estrategia de largo plazo se requieren políticas públicas que integren incentivos claros, sistemas de rendición de cuentas y mecanismos de evaluación que aseguren el cumplimiento del interés general.

En síntesis, el fortalecimiento de la educación pública colombiana depende de la complementariedad inteligente entre los sectores público y privado. Las futuras investigaciones deberían concentrarse en el diseño de modelos de participación medibles y sostenibles, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4: Educación de calidad), de modo que la educación se consolide como un motor de inclusión social y desarrollo humano.

5. Metodología

La presente sección describe el enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de la investigación y explica los procedimientos mediante los cuales se llevará a cabo la recolección, análisis e interpretación de la información. El objetivo de esta metodología es analizar el papel que puede desempeñar el sector privado en el fortalecimiento de la educación básica en Colombia, particularmente en relación con tres dimensiones fundamentales del sistema educativo: el acceso, la calidad y la equidad.

Para alcanzar este propósito se adoptó un enfoque metodológico predominantemente cuantitativo, complementado con análisis documental de fuentes secundarias. El componente cuantitativo se desarrolló a través de la recolección de datos primarios mediante una encuesta estructurada con escala Likert aplicada a 207 personas en Colombia, mientras que el análisis documental integró literatura académica, informes institucionales y estadísticas oficiales sobre el sistema educativo colombiano. Esta combinación permitió articular evidencia empírica proveniente de percepciones ciudadanas con fundamentos teóricos y empíricos provenientes de la literatura especializada, sin que el estudio pretenda establecer relaciones causales que requieran diseños experimentales o cualitativos de mayor profundidad.

La encuesta constituye el principal instrumento de validación empírica de la investigación, ya que permite recoger percepciones, experiencias y opiniones de los participantes respecto a las dinámicas del sistema educativo y al posible papel del sector privado en su fortalecimiento. De esta manera, la metodología busca articular el análisis teórico con evidencia empírica proveniente de los propios actores del sistema educativo.

5.1 Tipo de Investigación

La presente investigación se clasificó como un estudio de carácter descriptivo-correlacional con alcance exploratorio. Se considera descriptivo porque buscó caracterizar las percepciones de los participantes sobre el sistema educativo colombiano en cuatro dimensiones específicas —acceso, calidad, equidad y rol del sector privado—, identificando frecuencias, tendencias centrales y patrones de respuesta. Se considera correlacional porque exploró las asociaciones entre distintas variables del instrumento, así como las posibles diferencias entre grupos definidos por características sociodemográficas como el tipo de institución educativa, el área geográfica y el nivel socioeconómico. Finalmente, se considera de alcance exploratorio porque, dadas las limitaciones de la muestra y la naturaleza del instrumento aplicado, los hallazgos no permiten establecer relaciones causales entre la participación del sector privado y los resultados del sistema educativo, sino aproximarse a las percepciones que distintos actores tienen sobre estos temas.

Este alcance se ajusta al diseño metodológico real del estudio: una encuesta transversal, no probabilística, basada en la autopercepción de los participantes. Bajo esta clasificación, el análisis no pretendió demostrar que la participación del sector privado mejore directamente el acceso, la calidad o la equidad educativa, sino identificar tendencias de percepción dentro de la muestra encuestada y articularlas con la evidencia documental revisada en el marco teórico y el estado del arte. Esta delimitación hace más rigurosa la interpretación de los resultados y permite formular conclusiones acotadas a lo que los datos efectivamente sostienen.

5.2 Enfoque de la Investigación

El enfoque metodológico adoptado fue de carácter predominantemente cuantitativo, orientado a identificar patrones, tendencias y asociaciones estadísticas entre variables a partir de los datos recolectados mediante la encuesta. Las preguntas cerradas del cuestionario,

estructuradas en una escala Likert de cinco puntos, permitieron medir las percepciones de los participantes sobre cuatro dimensiones clave: el acceso a la educación básica y media, la calidad educativa, la equidad dentro del sistema y el papel del sector privado en su fortalecimiento. A partir de estas respuestas se identificaron distribuciones de frecuencia, medidas de tendencia central y diferencias estadísticamente significativas entre grupos de participantes con distintas características sociodemográficas.

Este enfoque cuantitativo se complementó con un análisis documental de fuentes académicas y estadísticas institucionales, que aportó el sustento teórico y empírico necesario para contextualizar e interpretar los resultados de la encuesta. Aunque en el diseño original del instrumento se contempló la inclusión de preguntas abiertas con el fin de recoger perspectivas cualitativas de los participantes, esta decisión fue reconsiderada durante el proceso de distribución, con el propósito de reducir el tiempo de diligenciamiento y facilitar el alcance de la meta mínima de respuestas. Por esta razón, el análisis se concentró en el componente cuantitativo, el cual resultó suficiente para responder a los objetivos planteados en la investigación.

5.3 Diseño de la Investigación

El diseño metodológico se estructuró en tres fases principales, desarrolladas de manera progresiva y sistemática: el diagnóstico del sistema educativo mediante análisis documental, la recolección de datos empíricos a través de una encuesta y el análisis de los resultados para identificar patrones y construir un modelo analítico.

5.3.1 Fase 1: Diagnóstico y análisis documental

La primera fase tuvo como objetivo construir un diagnóstico del sistema educativo colombiano a partir de la revisión de literatura académica, documentos de política pública e

informes institucionales. Esta etapa permitió contextualizar el problema de investigación e identificar las principales brechas existentes en el sistema educativo, particularmente en lo relacionado con el acceso, la calidad y la equidad entre distintos grupos sociales y territoriales.

Se revisaron estudios previos sobre el funcionamiento del sistema educativo colombiano, el papel del sector privado en la educación y las experiencias de colaboración público-privada. Asimismo, se analizaron datos provenientes de fuentes oficiales como el Ministerio de Educación Nacional, el ICFES y organismos internacionales productores de indicadores educativos. Este diagnóstico constituyó la base conceptual para el diseño del instrumento de recolección de datos.

5.3.2 Fase 2: Recolección de datos mediante encuesta

La segunda fase consistió en la recolección de datos primarios mediante una encuesta en línea diseñada específicamente para este estudio, implementada a través de Google Forms. Inicialmente, el instrumento fue concebido para ser aplicado exclusivamente a jóvenes pertenecientes a la Generación Z en Colombia. Sin embargo, durante el proceso de distribución se tomó la decisión de ampliar el alcance a personas de todas las edades, con base en la consideración de que las problemáticas de acceso, calidad y equidad en la educación básica y media han afectado a múltiples generaciones de colombianos, y que la opinión de distintos grupos etarios enriquece y amplía la perspectiva del análisis.

Se buscó alcanzar una muestra mínima de 200 participantes y se lograron recopilar 207 respuestas válidas, provenientes de personas con experiencias educativas en instituciones tanto públicas como privadas, y en zonas tanto urbanas como rurales del país. Este resultado permitió contar con un volumen de información suficiente para realizar análisis estadísticos significativos e identificar patrones en las percepciones de distintos grupos de la población.

Para garantizar la diversidad de la muestra y ampliar su alcance a distintos perfiles de participantes, la encuesta fue distribuida a través de redes sociales, contactos personales, comunidades estudiantiles y canales digitales vinculados con instituciones educativas. Cabe aclarar que, dado el carácter no probabilístico del muestreo, esta estrategia no permitió garantizar representatividad estadística respecto al conjunto de la población colombiana, sino captar una variedad de perspectivas dentro de los grupos accesibles a través de dichos canales.

Uno de estos actores fue Iván Triana, bibliotecólogo, magíster en Administración de Empresas e Innovación, y cofundador de la Biblioteca de la Creatividad, una iniciativa de emprendimiento social y educativo ubicada en la zona rural de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Fundada en 2009 junto con Andrea Barón, esta organización trabaja desde hace más de quince años con niños y jóvenes de entre 6 y 18 años en la vereda Quiba Alta, una de las zonas rurales más apartadas y vulnerables de la ciudad. La Biblioteca de la Creatividad actúa como un punto de encuentro entre los proyectos de jóvenes rurales y el compromiso de empresas, universidades y organizaciones, con el propósito de empoderar a las nuevas generaciones como líderes sociales y emprendedores. Su labor ha sido reconocida a nivel nacional e internacional como un modelo innovador de transformación social a través de la educación (Triana citado en El Espectador, 2025; Colombia Visible, 2025). Gracias al contacto con Iván Triana fue posible llegar a niños y jóvenes que estudian en escuelas públicas rurales, cuya perspectiva resultó fundamental para enriquecer la muestra con voces provenientes de contextos educativos frecuentemente ausentes en este tipo de investigaciones.

Adicionalmente, se contó con la colaboración de Juan Pablo Alvarado Herrera, profesional con experiencia en el ámbito de las becas educativas y la gestión de iniciativas orientadas al acceso a la educación, quien apoyó activamente la distribución del instrumento

entre poblaciones vinculadas a programas de financiamiento educativo y organizaciones del sector privado con enfoque social.

El cuestionario estuvo compuesto por catorce preguntas cerradas con escala tipo Likert de cinco puntos, donde 1 correspondía a "totalmente en desacuerdo" y 5 a "totalmente de acuerdo". Estas preguntas midieron la percepción de los participantes sobre cuatro variables clave: el acceso a la educación básica y media, la calidad educativa, la equidad dentro del sistema educativo y el papel del sector privado en su fortalecimiento. El instrumento completo se presenta en el Anexo A.

5.3.3 Fase 3: Análisis de datos y construcción del modelo de resultados

Una vez finalizado el proceso de recolección, se procedió al análisis de la información obtenida. La base de datos generada por Google Forms fue descargada en formato compatible con herramientas de análisis estadístico, lo que permitió realizar distintos tipos de análisis cuantitativos.

En primer lugar, se desarrolló un análisis descriptivo que examinó la distribución de las respuestas mediante el cálculo de frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central, con el fin de identificar patrones generales en las percepciones de los encuestados respecto a las variables analizadas.

Posteriormente, se realizó un análisis comparativo entre distintos grupos de participantes, particularmente entre diferentes estratos socioeconómicos, tipos de institución educativa y zonas geográficas. Este análisis permitió identificar diferencias en la percepción de la calidad educativa, el acceso a oportunidades y el posible impacto del sector privado en el sistema educativo.

Se exploraron, además, relaciones entre variables mediante análisis de correlación y modelos estadísticos orientados a identificar factores asociados con las percepciones sobre la calidad, el acceso y la equidad educativa. Estos modelos permitieron examinar cómo variables como el estrato socioeconómico, el tipo de institución o la zona de ubicación geográfica influyeron en la percepción general del sistema educativo por parte de los participantes.

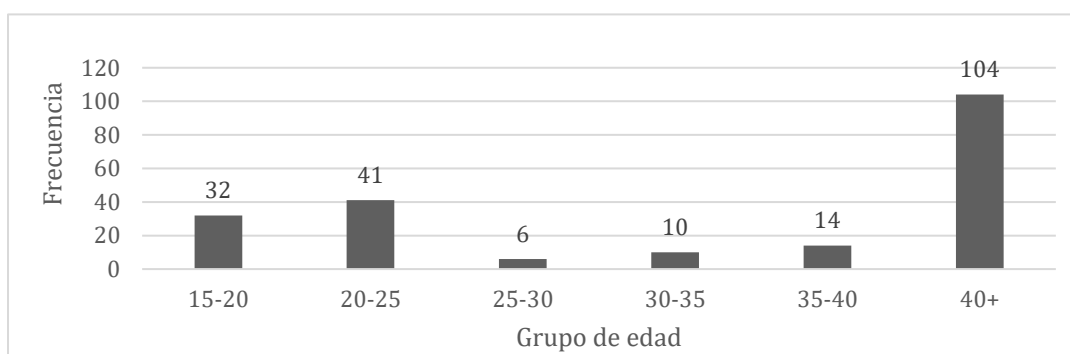
Durante todo el proceso de recolección y análisis se garantizaron los principios éticos fundamentales de la investigación académica. La participación en la encuesta fue completamente voluntaria, todas las respuestas fueron anónimas y la información recopilada fue utilizada exclusivamente con fines académicos.

6. Resultados

6.1 Caracterización de la muestra

La encuesta fue respondida por un total de 207 personas. Aunque el instrumento fue diseñado inicialmente para ser aplicado exclusivamente a jóvenes de la Generación Z, durante el proceso de distribución se tomó la decisión de abrirlo a personas de todas las edades, reconociendo que las problemáticas de acceso, calidad y equidad en la educación básica y media han impactado a múltiples generaciones de colombianos. Como resultado, el grupo más numeroso de participantes correspondió a mayores de 40 años, con 104 personas (50,2% del total), seguido por el grupo de 20 a 25 años con 41 participantes (19,8%), el grupo de 15 a 20 años con 32 personas (15,5%), el grupo de 35 a 40 años con 14 (6,8%), el de 30 a 35 años con 10 (4,8%) y el de 25 a 30 años con 6 personas (2,9%).

Figura 1. Distribución de participantes por grupo de edad



En cuanto al tipo de institución educativa en la que cursaron la mayor parte de su educación básica y media, 153 participantes (73,9%) estudiaron en colegios privados, 48 (23,2%) en colegios públicos, 5 (2,4%) en ambos tipos por periodos similares y 1 (0,5%) indicó que no aplicaba a su caso.

Respecto al área geográfica, la gran mayoría de los participantes, 182 personas (87,9%), provenían de zonas urbanas, mientras que 23 (11,1%) pertenecían a zonas rurales. En relación con el nivel socioeconómico del hogar durante la etapa escolar, el grupo más numeroso se ubicó en el nivel medio-alto con 73 personas (35,3%), seguido del nivel medio con 61 (29,5%), el nivel alto o muy alto con 44 (21,3%), el nivel medio-bajo con 20 (9,7%) y el nivel muy bajo o bajo con 9 participantes (4,3%).

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de la muestra

Variable	Categoría	N	Porcentaje
Edad	15-20 años	32	15,55%
	20-25 años	41	19,8%
	25-30 años	6	2,9%
	30-35 años	10	4,8%
	35-40 años	14	6,8%
	40 años o más	104	50,2%
Tipo de institución educativa	Privada	153	73,9%
	Pública	48	23,2%
	Ambas por periodos similares	5	2,4%
	No aplica	1	0,5%

Área geográfica	Zona Urbana	182	87,9%
	Zona Rural	23	11,1%
	No aplica	2	1%
Nivel Socioeconómico	Medio-Alto	73	35,3%
	Medio	61	29,5%
	Alto o muy alto	44	21,3%
	Medio-bajo	20	9,7%
	Muy bajo o bajo	9	4,3%
Situación educativa	Egresado (a) de educación básica y media	109	52,27%
	Ninguna de las anteriores		31,9%
	Estudiante de educación básica o media		14,5%
	Egresado (a) de educación básica (primaria)		1%

Es importante señalar que la muestra obtenida no pretende ser estadísticamente representativa de la totalidad de los actores del sistema educativo colombiano. La concentración de participantes mayores de 40 años (50,2%), provenientes principalmente de

zonas urbanas (87,9%) e instituciones privadas (73,9%), refleja las características de las redes de distribución utilizadas y constituye una limitación que debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados. En consecuencia, este estudio debe entenderse como un ejercicio exploratorio de percepción que aporta evidencia complementaria a la literatura académica revisada, y no como una medición representativa de la opinión de todos los grupos que conforman el sistema educativo nacional. Futuras investigaciones podrían fortalecer estos hallazgos mediante muestras probabilísticas que incorporen de manera más equilibrada voces de estudiantes de colegios públicos, docentes, directivos institucionales, familias de zonas rurales y representantes del sector empresarial.

6.2 Confiabilidad del instrumento

Antes de analizar los resultados de la encuesta, se verificó que el instrumento de medición fuera confiable, es decir, que las 14 preguntas de la escala midieran de forma coherente y consistente los temas para los que fueron diseñadas. Para esto se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, que es la medida más utilizada en investigación social para evaluar qué tan bien un conjunto de preguntas mide un mismo concepto de manera uniforme. Este coeficiente varía entre 0 y 1, donde valores más cercanos a 1 indican mayor consistencia interna.

El valor obtenido para los 14 ítems del cuestionario fue de $\alpha = 0,629$, lo cual se considera aceptable para estudios de carácter exploratorio en ciencias sociales, de acuerdo con los criterios establecidos por Nunnally (1978), quien señala que valores superiores a 0,60 son suficientes en investigaciones de esta naturaleza. Este resultado indicó que las preguntas del instrumento midieron de manera suficientemente coherente las cuatro dimensiones analizadas: acceso, calidad, equidad y papel del sector privado en la educación.

Es importante precisar que el coeficiente Alpha de Cronbach se calculó de manera global para los 14 ítems del instrumento, lo cual permite una aproximación general a la consistencia interna del cuestionario. Sin embargo, dado que el instrumento aborda cuatro dimensiones conceptualmente distintas (acceso, calidad, equidad y rol del sector privado), un Alpha global no necesariamente refleja la consistencia interna específica de cada dimensión. En futuras investigaciones que adopten este instrumento o instrumentos similares sería deseable calcular la confiabilidad por dimensión y aplicar procedimientos de validación más robustos, como análisis factorial exploratorio o confirmatorio, con el fin de evaluar con mayor precisión la estructura del instrumento y la coherencia de cada bloque temático.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los ítems del instrumento

Item	Enunciado	Media	Varianza
P1	Igualdad de acceso en la comunidad	2,908	1,579
P2	Barreras económicas al acceso escolar	3,053	1,575
P3	Suficiencia y diversidad de la oferta educativa	3,643	1,357
P4	Conocimiento/beneficio de becas o apoyos	2,957	1,877
P5	Educación útil para metas profesionales	3,957	1,217
P6	Infraestructura y recursos tecnológicos	3,947	1,468
P7	Calidad general de la educación en Colombia	2,744	1,153
P8	Diferencia calidad pública vs. privada	4,300	0,949
P9	Igualdad de oportunidades independiente del SES	1,676	0,909
P10	La educación reduce brechas sociales	2,821	1,866
P11	Calidad comparable: rural vs. Urbano	2,097	1,117
P12	Consciencia de iniciativas del sector privado	3,246	1,322
P13	Participación privada es fundamental	4,111	0,827
P14	Alianzas público-privadas deben incentivarse	4,222	0,902

6.3 Resultados descriptivos por dimensión

A continuación, se presentan los resultados de las 14 preguntas del cuestionario, organizadas en las cuatro dimensiones que estructuraron el instrumento. Cada pregunta fue respondida en una escala del 1 al 5, donde 1 significaba "totalmente en desacuerdo" y 5 "totalmente de acuerdo". Para facilitar la lectura, se reporta para cada pregunta la media —es decir, el promedio de todas las respuestas— y la distribución porcentual de las respuestas en cada categoría.

Tabla 3. Distribución porcentual de respuestas y estadísticos descriptivos por ítem

Ítem	Tot desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Tot. De acuerdo	Media	Desv Est
P1	12,1%	34,3%	17,4%	23,2%	13%	2,91	1,26
P2	14%	23,7%	15,5%	36,7%	10,1%	3,05	1,25
P3	5,3%	15,9%	12,1%	42,5%	24,2%	3,64	1,16
P4	20,3%	21,3%	14,5%	30,4%	13,5%	2,96	1,37
P5	2,9%	11,1%	12,1%	35,3%	38,6%	3,96	1,10
P6	4,3%	14,5%	6,3%	31,9%	43%	3,95	1,21
P7	9,2%	41,1%	20,8%	24,2%	4,8%	2,74	1,07
P8	3,4%	2,4%	9,2%	30,9%	54,1%	4,30	0,97
P9	55,1%	31,9%	5,3%	5,8%	1,9%	1,68	0,95
P10	18,8%	31,9%	12,6%	21,7%	15%	2,82	1,37
P11	32,4%	41,5%	13%	10,1%	2,9%	2,1	1,06
P12	8,2%	20,3%	21,7%	38,2%	11,6%	3,25	1,15
P13	1%	7,7%	7,2%	47,3%	36,7%	4,11	0,91
P14	3,4%	3,4%	5,8%	42,5%	44,9%	4,22	0,95

6.3.1 Dimensión de acceso a la educación (P1 a P4)

Las primeras cuatro preguntas del cuestionario exploraron la percepción de los participantes sobre el acceso a la educación en Colombia. Los resultados mostraron una visión predominantemente crítica.

Frente a la afirmación de que todas las personas en su comunidad tienen igualdad de oportunidades para acceder a una educación de buena calidad (P1), el 46,4% de los participantes manifestó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, frente a solo un 36,2% que expresó acuerdo. La media de esta pregunta fue de 2,91 sobre 5, lo que refleja que la mayoría considera que el acceso igualitario a una educación de calidad no está garantizado en sus entornos.

En cuanto a si las barreras económicas representan un obstáculo para que las familias puedan acceder y permanecer en el sistema educativo (P2), los resultados estuvieron divididos: el 46,8% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con que estas barreras sí existen y afectan a las familias, mientras que un 37,7% expresó desacuerdo. La media fue de 3,05.

La pregunta sobre si existe suficiente oferta de instituciones educativas en la región del participante (P3) obtuvo la media más alta de esta dimensión con 3,64, y el 66,7% de respuestas favorables, lo que sugiere que la mayoría percibe que hay colegios disponibles, aunque esto no implica necesariamente que sean de buena calidad o accesibles económicamente.

Finalmente, la pregunta sobre si el participante conocía o había sido beneficiario de programas de becas o apoyos económicos para estudiar (P4) obtuvo una media de 2,96, con un 41,5% en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Esto evidencia que una parte importante de la población desconoce o no ha tenido acceso a este tipo de mecanismos de financiamiento educativo, lo cual es relevante para los propósitos de esta investigación.

6.3.2 Dimensión de calidad educativa (P5 a P8)

Las preguntas 5 a 8 exploraron la percepción sobre la calidad de la educación recibida. Esta dimensión mostró un contraste interesante: los participantes valoraron positivamente su experiencia personal en sus propias instituciones, pero fueron muy críticos al evaluar la calidad del sistema educativo colombiano en general.

La pregunta sobre si la educación recibida les proporcionó las herramientas necesarias para alcanzar sus metas profesionales (P5) obtuvo una media de 3,96, con el 73,9% de los participantes de acuerdo o totalmente de acuerdo. De manera similar, la pregunta sobre si su institución contaba con buena infraestructura y recursos tecnológicos (P6) registró la media más alta de toda la encuesta con 3,95 y el 74,9% de respuestas favorables.

Sin embargo, cuando se preguntó por la calidad general de la educación en Colombia (P7), el panorama fue radicalmente distinto: la media cayó a 2,74 y el 50,2% de los participantes expresó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que la educación en el país sea de buena calidad. Este resultado es especialmente significativo porque muestra que, aunque muchos participantes valoran positivamente su propia experiencia educativa, reconocen que esa experiencia no representa la realidad del sistema educativo en su conjunto.

La pregunta más contundente de toda esta dimensión fue la que consultó si existe una diferencia notable entre la calidad de la educación en colegios públicos frente a los privados (P8), con una media de 4,30 y el 85,0% de los participantes de acuerdo o totalmente de acuerdo. Este fue uno de los dos ítems con mayor nivel de consenso en toda la encuesta, lo que refleja una percepción ampliamente compartida sobre la brecha de calidad entre los dos tipos de institución.

6.3.3 Dimensión de equidad educativa (P9 a P11)

Esta fue la dimensión con las valoraciones más bajas de todo el instrumento, lo que indica que los participantes perciben la inequidad del sistema educativo colombiano como uno de sus problemas más graves.

La pregunta sobre si las oportunidades educativas en Colombia son las mismas para todas las personas sin importar su nivel socioeconómico (P9) obtuvo una media de apenas 1,68 sobre 5, siendo el ítem con la puntuación más baja de toda la encuesta. El 87,0% de los participantes expresó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta afirmación. Este resultado es contundente: existe un consenso casi unánime entre los encuestados de que el sistema educativo colombiano no ofrece igualdad de oportunidades para todos.

La pregunta sobre si la educación en Colombia contribuye eficazmente a reducir las brechas sociales y económicas entre las personas (P10) también obtuvo resultados negativos, con una media de 2,82 y el 50,7% en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, lo que sugiere que la mayoría no percibe que el sistema educativo esté cumpliendo su función de movilidad social.

Finalmente, la pregunta sobre si los colegios en zonas rurales y urbanas ofrecen una calidad educativa comparable (P11) obtuvo una media de 2,10, con el 73,9% de los participantes en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Esto confirma la percepción generalizada de que existe una brecha significativa entre la educación rural y urbana en el país.

6.3.4 Dimensión del papel del sector privado (P12 a P14)

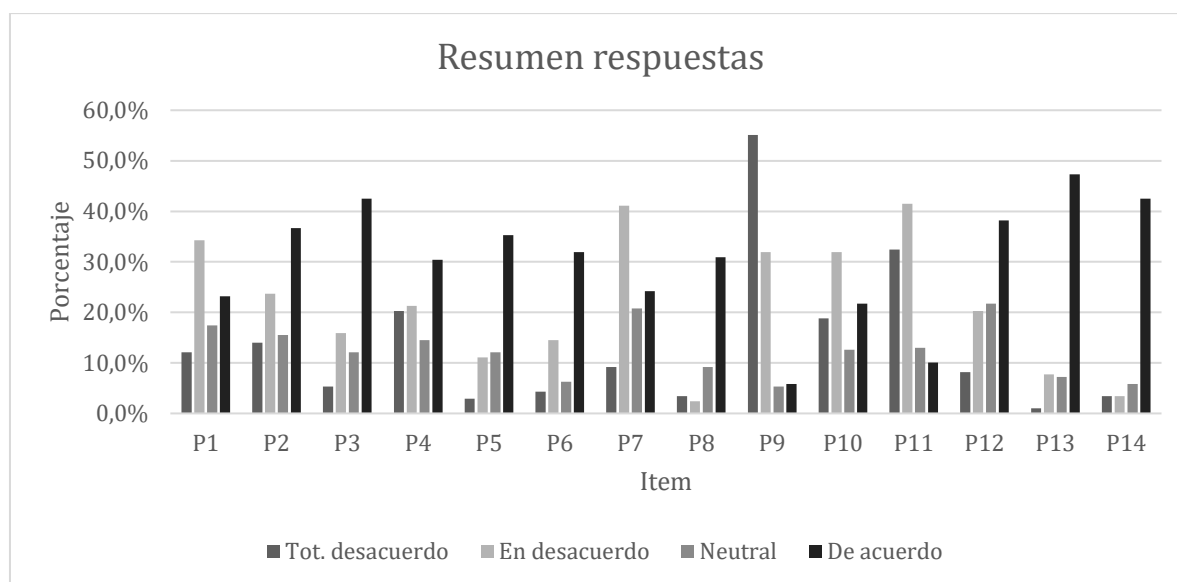
Las últimas tres preguntas exploraron la percepción sobre el rol del sector privado en la educación colombiana. Esta dimensión concentró los niveles de acuerdo más altos de toda la encuesta.

La pregunta sobre si el participante conoce programas o iniciativas del sector privado orientadas a mejorar la educación en Colombia (P12) obtuvo una media de 3,25, con el 49,8% de acuerdo o totalmente de acuerdo. Sin embargo, el 28,5% manifestó desconocer este tipo de iniciativas, lo que evidencia que aún existe una brecha en la visibilidad y comunicación de las acciones del sector privado en educación.

La pregunta sobre si la participación del sector privado es fundamental para mejorar la calidad y la equidad de la educación en Colombia (P13) alcanzó una media de 4,11, con el 84,0% de los participantes de acuerdo o totalmente de acuerdo. Este resultado indica que la gran mayoría de los encuestados considera que el sector privado tiene un papel importante y necesario en la transformación del sistema educativo.

La pregunta con el mayor nivel de consenso positivo junto con P8 fue la que consultó si las alianzas entre colegios públicos y el sector privado deberían ser incentivadas (P14), con una media de 4,22 y el 87,4% de respuestas favorables. Este hallazgo es central para los propósitos de esta investigación, pues indica que existe un respaldo social muy amplio para el tipo de alianzas público-privadas que se propone en este trabajo.

Figura 2. Resumen visual de la distribución porcentual de respuestas por ítem



Nota. La figura presenta la distribución porcentual de las cinco categorías de respuesta de la escala Likert para los 14 ítems del instrumento. Tot. = Totalmente. N = 207.

6.4 Análisis comparativo entre grupos

Con el fin de verificar si las percepciones sobre la educación difieren de manera estadísticamente significativa entre distintos grupos de participantes, se realizaron tres pruebas de comparación. Dado que las respuestas de la encuesta son variables ordinales —es decir, tienen un orden pero no son números continuos como los de una regla—, se utilizaron pruebas no paramétricas, que son las más adecuadas para este tipo de datos y no requieren asumir que los datos siguen una distribución normal.

6.4.1 Calidad educativa según tipo de institución

Para comparar si la percepción sobre la calidad general de la educación (P7) fue diferente entre quienes estudiaron en colegios públicos y quienes lo hicieron en colegios privados, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney, que permite determinar si dos grupos tienen distribuciones significativamente distintas.

Los resultados mostraron que sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos ($U = 2420$; $Z = -3,561$; $p = 0,00037$). Los participantes que estudiaron en colegios públicos presentaron una media de 2,25, notablemente inferior a la de quienes estudiaron en colegios privados, cuya media fue de 2,92. En términos prácticos, esto significa que las personas que asistieron a colegios públicos tienen una percepción significativamente más negativa sobre la calidad de la educación que recibieron, en comparación con quienes asistieron a colegios privados.

Tabla 4. Prueba U de Mann-Whitney: calidad educativa general (P7) según tipo de institución

Grupo	N	Media	Desv. Est	U	Z	p-valor
Institución Publica	48	2,25	0,863	2420	-3,561	0,00037
Institución privada	153	2,92	1,085			

Nota. Se aplicó la prueba U de Mann-Whitney para comparar la percepción de calidad educativa general entre participantes de instituciones públicas y privadas. El resultado indicó una diferencia estadísticamente significativa ($p < 0,05$), lo que sugiere que quienes cursaron su educación en colegios públicos perciben una menor calidad educativa en comparación con quienes asistieron a colegios privados.

6.4.2 Calidad educativa según zona geográfica

Se aplicó también la prueba U de Mann-Whitney para comparar la percepción de calidad educativa (P7) entre participantes de zonas rurales y urbanas.

En este caso, los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos ($U = 2026$; $Z = -0,250$; $p = 0,80264$). La media de los participantes rurales fue de 2,78, muy similar a la de los participantes urbanos con 2,74. Este resultado no significa que no exista una brecha real de calidad entre el campo y la ciudad —de hecho, el 73,9% de

los encuestados reconoció esa brecha en la pregunta P11—, sino que la insatisfacción con la calidad del sistema educativo colombiano es igualmente generalizada tanto en zonas rurales como urbanas. En otras palabras, las personas de ambos territorios comparten una visión crítica del sistema, aunque por razones posiblemente diferentes.

Tabla 5. Prueba U de Mann-Whitney: calidad educativa general (P7) según área geográfica

Grupo	N	Media	Desv. Est	U	Z	p-valor
Zona Rural	23	2,783	0,902	2016	-0,250	0,80264
Zona Urbana	182	2,736	1,096			

Nota. Se aplicó la prueba U de Mann-Whitney para comparar la percepción de calidad educativa general entre participantes de zonas rurales y urbanas. El resultado no indicó una diferencia estadísticamente significativa ($p > 0,05$), lo que sugiere que la insatisfacción con la calidad del sistema educativo es igualmente generalizada en ambos territorios, aunque posiblemente por razones distintas.

6.4.3 Percepción de igualdad de oportunidades según nivel socioeconómico

Para analizar si la percepción sobre la igualdad de oportunidades educativas (P9) varía según el nivel socioeconómico de los participantes, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis, que es la extensión de Mann-Whitney para comparar más de dos grupos al mismo tiempo.

Los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los cinco grupos socioeconómicos ($H = 7,785$; $p = 0,0998$). Sin embargo, al revisar las medias de cada grupo, sí se observó una tendencia clara y llamativa: a mayor nivel socioeconómico, menor fue la percepción de igualdad de oportunidades. Las medias por grupo fueron: muy bajo o bajo (1,67), medio-bajo (1,95), medio (1,87), medio-alto (1,62) y alto o muy alto (1,39).

Aunque esta diferencia no alcanzó el umbral de significancia estadística de $p < 0,05$, la tendencia es consistente y tiene una interpretación interesante: los participantes de niveles socioeconómicos más altos parecen percibir con mayor claridad la desigualdad del sistema educativo, posiblemente porque su mayor acceso a contextos educativos diversos les permite comparar y contrastar mejor las condiciones de quienes tienen menos recursos.

Tabla 6. Prueba de Kruskal-Wallis: percepción de igualdad de oportunidades (P9) según nivel socioeconómico

Grupo SES	N	Media	Desv. Est	H	p-valor
Muy bajo o bajo	9	1,667	0,707	7,785	0,0998
Medio-bajo	20	1,950	1,146		
Medio	61	1,869	1,087		
Medio-alto	73	1,616	0,844		
Alto o muy alto	44	1,386	0,813		

Nota. Se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis para comparar la percepción sobre igualdad de oportunidades educativas (P9) entre los cinco grupos socioeconómicos. El resultado no alcanzó significancia estadística ($H = 7,785$; $gl = 4$; $p = 0,0998$), por lo que no es posible afirmar que existan diferencias significativas entre grupos con base en este análisis. No obstante, se observó una tendencia descriptiva consistente: a mayor nivel socioeconómico, menor fue la media registrada, lo que sugiere que los participantes de niveles más altos tendieron a percibir con mayor claridad la desigualdad del sistema educativo.

6.5 Análisis de correlación entre percepción del sector privado y apoyo a las alianzas

El último análisis buscó examinar si existe una relación entre dos variables clave para esta investigación: la percepción de que la participación del sector privado es fundamental para mejorar la educación (P13) y el respaldo a que las alianzas entre colegios públicos y el sector privado sean incentivadas (P14).

Para esto se utilizó la correlación de Pearson, que es una medida que indica qué tan relacionadas están dos variables y en qué dirección. Su valor varía entre -1 y 1, donde 1 significa una relación positiva perfecta (cuando una sube, la otra también sube), -1 una relación negativa perfecta (cuando una sube, la otra baja) y 0 significa que no hay relación entre ellas.

El resultado mostró una correlación positiva, moderada y estadísticamente significativa entre P13 y P14 ($r = 0,483$; $R^2 = 0,233$; $t = 7,891$; $p < 0,001$). En términos simples, esto significa que las personas que consideraron que el sector privado tiene un papel fundamental en la mejora de la educación, también tendieron a apoyar más fuertemente el desarrollo de alianzas público-privadas. El valor de $R^2 = 0,233$ indica que el 23,3% de la variación en las respuestas de P14 puede explicarse por las respuestas de P13, lo cual es un nivel de asociación relevante para variables de percepción social.

Tabla 7. Resumen del análisis de correlación de Pearson entre P13 y P14

Parámetro	Valor
Variable X	P13: La participación del sector privado es fundamental
Variable Y	P14: Las alianzas público-privadas deben incentivarse
n (pares válidos)	207
Coeficiente r de Pearson	0,483
R ² (varianza explicada)	0,233
Estadístico t	7,891
p-valor	< 0,001
Significancia estadística	Sí (p < 0,001)
Dirección	Positiva
Magnitud	Moderada

Nota. El coeficiente r de Pearson indica una correlación positiva moderada entre ambas variables, lo que significa que los participantes que valoraron positivamente el papel del sector privado en la educación también tendieron a apoyar el desarrollo de alianzas público-privadas. El valor de $R^2 = 0,233$ indica que el 23,3% de la variación en las respuestas de P14 es explicada

por las respuestas de P13. La clasificación de la magnitud como moderada sigue los criterios de Evans (1996), quien establece este rango para valores de r entre 0,40 y 0,59.

Adicionalmente, se calculó una matriz de correlaciones entre seis variables clave del instrumento, con el fin de identificar qué tan relacionadas estaban entre sí las percepciones sobre calidad, equidad y el papel del sector privado.

Tabla 8. Matriz de correlaciones entre variables clave del instrumento

	P7	P9	P10	P11	P13	P14
P7 Calidad	1	0,246	0,253	0,184	0,094	0,104
P9 Oportunidades	0,246	1	0,235	0,243	-0,143	-0,183
P10 Reducir brechas	0,253	0,235	1	0,247	0,082	0,143
P11 Rural=Urbano	0,184	0,243	0,247	1	-0,057	0,012
P13 Rol privado	0,094	-0,143	0,082	-0,057	1	0,483
P14 Alianzas	0,104	-0,183	0,143	0,012	0,483	1

Los resultados de la matriz revelaron que la correlación más fuerte se observó entre los ítems P13 (rol del sector privado) y P14 (alianzas público-privadas), con $r = 0,483$, ya analizada en la sección anterior. Otras asociaciones moderadas se observaron entre P7 (calidad general) y P10 (la educación reduce brechas), con $r = 0,253$, y entre P10 y P11 (rural vs. urbano), con $r = 0,247$, lo cual sugiere que la percepción de calidad y la percepción de equidad están moderadamente relacionadas entre sí. Por su parte, las variables relacionadas con el sector privado (P13 y P14) mostraron correlaciones bajas o prácticamente nulas con las variables de

equidad (P9 y P11), e incluso ligeramente negativas en algunos casos, lo que sugiere que la percepción sobre el rol del sector privado y la percepción sobre la desigualdad del sistema son dimensiones relativamente independientes en la mente de los encuestados.

Adicionalmente, dado que las variables analizadas provienen de una escala Likert ordinal, se calculó como complemento la correlación de Spearman, considerada más apropiada que Pearson cuando los datos no son estrictamente continuos. Los resultados reforzaron las tendencias observadas: la asociación entre P13 y P14 se mantuvo como la más fuerte de la matriz, con un coeficiente $\rho = 0,557$ ($p < 0,001$), levemente superior al obtenido con Pearson, lo que confirma la robustez del hallazgo. Las correlaciones entre las variables de equidad y el rol del sector privado siguieron siendo bajas o ligeramente negativas en ambos métodos, lo que sostiene la interpretación de que se trata de dimensiones percibidas como relativamente independientes. La consistencia entre Pearson y Spearman aumenta la confianza en los patrones identificados, dentro de las limitaciones propias del diseño exploratorio del estudio.

Conclusiones

La presente investigación analizó las formas en que el sector privado puede contribuir al cumplimiento de la función estatal de garantizar el acceso, la calidad y la equidad en la educación básica y media en Colombia. Para ello se combinaron dos fuentes complementarias de evidencia: una revisión documental de más de veinte fuentes académicas nacionales e internacionales, y los datos primarios obtenidos a través de una encuesta aplicada a 207 personas de distintas edades, tipos de institución y zonas geográficas del país. Es importante señalar desde el inicio que, dado el carácter exploratorio y no representativo de la muestra, las conclusiones derivadas de la encuesta deben leerse como evidencia de percepción ciudadana que complementa y contextualiza la literatura revisada, y no como prueba causal de los efectos de la participación privada en el sistema educativo. Con esta aclaración, se presentan a continuación las conclusiones organizadas en torno a los cuatro objetivos específicos que orientaron el estudio.

En relación con el primer objetivo, que buscaba identificar las principales barreras y desafíos que enfrenta la educación colombiana en términos de acceso, calidad y equidad, tanto la literatura como los resultados de la encuesta dibujaron un panorama de desigualdad estructural persistente. Desde el plano documental, estudios como los de López et al. (2017), Rodríguez et al. (2021) y el Banco Mundial (2024) documentan brechas sostenidas entre instituciones públicas y privadas, entre zonas urbanas y rurales, y entre grupos socioeconómicos, que se traducen en diferencias significativas en los resultados de pruebas estandarizadas y en las tasas de deserción escolar. Desde la perspectiva de los encuestados, estas brechas encontraron un reflejo contundente: el 87% rechazó la idea de que las oportunidades educativas sean iguales para todos independientemente del nivel socioeconómico, el 73,9% consideró que la educación rural y urbana no es comparable en

calidad, y el 50,2% expresó insatisfacción con la calidad general del sistema educativo colombiano. Además, el 41,5% de los participantes desconoce o nunca ha tenido acceso a programas de becas o apoyos económicos, lo que evidencia que los mecanismos de financiamiento educativo existentes no alcanzan a quienes más los necesitan. En conjunto, estos hallazgos sugieren que el sistema educativo colombiano no solo enfrenta una crisis de recursos, sino una crisis de confianza: amplios sectores de la ciudadanía no perciben que el Estado esté cumpliendo efectivamente su función de garante del derecho a la educación en condiciones de equidad.

En cuanto al segundo objetivo, que propuso examinar experiencias nacionales e internacionales de colaboración público-privada en educación, la revisión de literatura permitió identificar tanto lecciones de éxito como advertencias necesarias. La evidencia más directamente aplicable al contexto colombiano proviene de los colegios en concesión en Bogotá, donde López et al. (2017) reportaron, mediante análisis cuantitativo basado en propensity score matching, que los estudiantes de estas instituciones presentaban menor desigualdad de oportunidades y mejores resultados en las pruebas Saber 11 frente a sus pares de colegios públicos tradicionales. De manera similar, la evaluación del programa PACES realizada por Angrist et al. (2002) reportó que los beneficiarios de los subsidios para acceder a instituciones privadas de educación secundaria presentaron mayores tasas de finalización escolar y mejores resultados académicos, lo que constituye un antecedente relevante para el modelo de financiamiento estudiantil que esta investigación propone extender a la educación básica y media. A escala internacional, la revisión sistemática de Sajida y Kusumasari (2023) en doce países identificó que el compromiso mutuo entre socios, la regulación clara y los mecanismos de rendición de cuentas son condiciones ineludibles para el éxito de cualquier alianza educativa. El caso de Suecia, por su parte, enseña que la apertura a la competencia privada sin un diseño institucional robusto puede profundizar la segregación escolar, lo que

subraya la importancia de que cualquier modelo de colaboración en Colombia se enmarque en regulaciones sólidas orientadas al bien común.

Respecto al tercer objetivo, orientado a analizar las percepciones de actores clave sobre el papel del sector privado en la educación, los resultados de la encuesta aportaron hallazgos relevantes que se articulan coherentemente con la evidencia documental. El 84% de los participantes consideró que la participación del sector privado es fundamental para mejorar la calidad y equidad de la educación colombiana, y el 87,4% respaldó explícitamente que las alianzas entre colegios públicos y el sector privado deberían ser incentivadas. Estos porcentajes son relevantes porque provienen de una muestra diversa en edad, nivel socioeconómico, tipo de institución y zona geográfica. No obstante, los resultados deben interpretarse exclusivamente como tendencias de percepción dentro del grupo encuestado y no como evidencia generalizable a la totalidad de la población colombiana, dada la naturaleza no probabilística del muestreo. La correlación positiva moderada y estadísticamente significativa encontrada entre la valoración del rol del sector privado (P13) y el apoyo a las alianzas público-privadas (P14) — $r = 0,483$; $p < 0,001$ — indica además que estas opiniones son consistentes entre sí y no respuestas aisladas. No se trata de una aprobación superficial, sino de una posición articulada que refleja una demanda social real por modelos educativos que combinen la responsabilidad del Estado con la capacidad de acción del sector privado. Paradójicamente, a pesar de este respaldo, el 28,5% de los encuestados desconoce iniciativas concretas del sector privado en el ámbito educativo, lo que evidencia una brecha de comunicación y visibilidad que limita el potencial transformador de estas acciones y que debe resolverse para que cualquier modelo de alianza logre legitimidad social.

Finalmente, en relación con el cuarto objetivo, dirigido a proponer recomendaciones y modelos de colaboración público-privada que optimicen la contribución del sector privado a la

educación colombiana, el conjunto de evidencias reunidas a lo largo de esta investigación sugiere que Colombia reúne las condiciones sociales, institucionales y conceptuales para avanzar en el diseño de alianzas educativas más estructuradas. La evidencia documental y los resultados de percepción respaldan, de manera exploratoria, la plausibilidad de este planteamiento: el respaldo ciudadano hacia las alianzas público-privadas resultó amplio dentro de la muestra encuestada, la literatura internacional aporta modelos ajustables al contexto colombiano, y experiencias como los colegios en concesión y el programa PACES han reportado resultados positivos en estudios académicos cuando el diseño institucional es riguroso y la supervisión efectiva. Colfuturo, en particular, representa un referente de viabilidad operativa en el propio contexto colombiano: su modelo de cofinanciamiento público-privado para la formación de capital humano de alto nivel constituye el antecedente más cercano al mecanismo que esta investigación propone trasladar a la educación básica y media, adaptando sus principios de selección por mérito y necesidad, cofinanciamiento y rendición de cuentas a las condiciones de este nivel del sistema educativo. Lo que la evidencia señala como condición indispensable para avanzar en esta dirección es un marco regulatorio más claro, una mayor inversión en comunicación sobre las iniciativas existentes, y una apuesta decidida por priorizar las zonas rurales y las instituciones públicas de menor desempeño, donde las brechas son más profundas y el potencial de impacto de la participación privada es mayor.

Recomendaciones

Las recomendaciones que se presentan a continuación se derivan del análisis conjunto de la literatura académica revisada y de los resultados de la encuesta aplicada en el marco de esta investigación. Dado el carácter exploratorio del estudio, estas recomendaciones no se formulan como prescripciones definitivas basadas en causalidad demostrada, sino como orientaciones fundamentadas en evidencia empírica internacional, en experiencias documentadas dentro del contexto colombiano y en las percepciones de los 207 participantes encuestados. Su propósito es aportar elementos concretos para el debate sobre cómo estructurar, de manera rigurosa y equitativa, la participación del sector privado en el fortalecimiento de la educación básica y media en Colombia.

Al Estado colombiano y al Ministerio de Educación Nacional se recomienda avanzar en la consolidación de un marco legal específico para las alianzas público-privadas en educación básica y media, que establezca con claridad las responsabilidades de cada parte, los criterios de selección de socios privados, los mecanismos de evaluación de resultados y las garantías de equidad para las poblaciones más vulnerables. La revisión de literatura es consistente al señalar que la ambigüedad regulatoria es uno de los principales factores de fracaso en las alianzas educativas, tal como lo documentan Sajida y Kusumasari (2023) en su análisis de doce países. Colombia ya cuenta con experiencias valiosas —los colegios en concesión, el programa PACES— que pueden servir de base para construir un modelo más robusto, escalable y adaptado a las condiciones actuales del sistema educativo. Adicionalmente, se recomienda fortalecer los mecanismos de difusión de los programas de becas y apoyos económicos existentes: el hecho de que el 41,5% de los encuestados en este estudio desconozca o no haya tenido acceso a este tipo de iniciativas sugiere que el problema

no es únicamente de cobertura, sino también de visibilidad, accesibilidad y apropiación social de los instrumentos disponibles.

Al sector privado, incluyendo empresas, fundaciones y gremios, se recomienda que su participación en la educación básica transite progresivamente de acciones puntuales y desarticuladas hacia compromisos estructurados con objetivos medibles, plazos definidos y sistemas de rendición de cuentas públicos. El respaldo social registrado en este estudio — 87,4% de los encuestados apoyó las alianzas público-privadas y 84% consideró que la participación del sector privado es fundamental— representa una oportunidad concreta para que las empresas amplíen y visibilicen su acción educativa con mayor legitimidad ciudadana. Se recomienda, en particular, priorizar intervenciones en zonas rurales y en instituciones públicas de bajo desempeño, donde la evidencia académica sugiere que el potencial de impacto es mayor y donde la presencia actual de iniciativas privadas sigue siendo más limitada. La experiencia de la Biblioteca de la Creatividad en Ciudad Bolívar, cuyo fundador Iván Triana facilitó el acceso a población rural para este estudio, ilustra cómo iniciativas de base comunitaria con respaldo privado pueden generar transformaciones reales y sostenibles en contextos de alta vulnerabilidad, sin necesidad de estructuras institucionales complejas.

A las instituciones educativas públicas se recomienda abrirse activamente a la construcción de alianzas con el sector privado, no como una renuncia a su autonomía sino como una estrategia para ampliar sus capacidades pedagógicas, tecnológicas y de gestión dentro de un marco de supervisión estatal que garantice el interés público. Los datos de este estudio muestran que el 85% de los encuestados percibe una diferencia notable de calidad entre colegios públicos y privados, lo que indica que reducir esa brecha es una demanda social amplia y urgente. Incorporar prácticas, recursos y enfoques innovadores que el sector privado puede aportar —siempre bajo criterios de equidad y transparencia— es una vía que la evidencia

internacional y las experiencias colombianas documentadas sugieren como viable y potencialmente efectiva.

A la academia y a los centros de investigación se recomienda continuar generando evidencia empírica sobre los efectos reales de los modelos de colaboración público-privada en la educación básica colombiana. Esta investigación constituye un primer acercamiento exploratorio desde la perspectiva de las percepciones ciudadanas, pero sus alcances son limitados por el diseño muestral y la naturaleza del instrumento utilizado. Para avanzar en la comprensión del fenómeno se necesitan estudios longitudinales que midan el impacto de programas específicos en indicadores objetivos como permanencia escolar, resultados en pruebas Saber, reducción de brechas territoriales y movilidad social intergeneracional. También se recomienda desarrollar investigaciones con muestras probabilísticas que incorporen de forma más equilibrada las voces de estudiantes de colegios públicos, docentes, directivos, familias rurales y representantes del sector empresarial, de modo que las conclusiones tengan mayor capacidad de generalización al conjunto del sistema educativo colombiano.

Finalmente, se recomienda explorar el diseño de un programa piloto de becas para educación básica y media, estructurado bajo el modelo de alianza público-privada y tomando como referente conceptual la experiencia de Colfuturo en educación superior. Este programa podría comenzar en municipios con alta vulnerabilidad educativa e incorporar desde su diseño criterios claros de selección basados en necesidad económica y mérito académico, mecanismos de cofinanciamiento entre el Estado y el sector privado, y un sistema robusto de seguimiento y evaluación que permita ajustar el modelo a partir de evidencia real. La participación del sector privado en su financiamiento podría articularse con incentivos tributarios que hagan la inversión atractiva para las empresas sin comprometer el control estatal sobre los objetivos

pedagógicos y de equidad. Si bien este estudio no puede afirmar con certeza que un programa de este tipo producirá los resultados esperados —pues ello requeriría un diseño experimental o cuasiexperimental que escapa al alcance de esta investigación—, la convergencia entre la evidencia académica disponible, las experiencias colombianas documentadas y el respaldo ciudadano registrado en la encuesta constituye un punto de partida sólido para avanzar en su formulación y eventual implementación.

Referencias

- Angrist, J., Bettinger, E., Bloom, E., King, E., & Kremer, M. (2002). *Vouchers for private schooling in Colombia: Evidence from a randomized natural experiment*. *American Economic Review*, 92(5), 1535–1558.
- Arenas, J. (2021). *Calidad educativa y factores determinantes del aprendizaje en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.
- Babatunde, T., & Perera, S. (2023). *Public–Private Partnerships in Education: Global success factors and challenges*. *International Journal of Educational Development*, 97, 102734.
- Banco Mundial. (2024). *Beyond Bogotá: Confronting Colombia's education divide*. Washington, D.C.: World Bank Blogs.
- Böhlmark, A., Holmlund, H., & Lindahl, M. (2016). Parental choice, neighbourhood segregation or cream skimming? An analysis of school segregation after a generalized choice reform. *Journal of Population Economics*, 29(4), 1155–1190. <https://doi.org/10.1007/s00148-016-0595-y>
- Caracol Radio. (2025, diciembre 12). Iván Triana, el creador de la Biblioteca de la Creatividad en Ciudad Bolívar. <https://caracol.com.co/2025/12/12/ivan-triana-el-creador-de-la-biblioteca-de-la-creatividad-en-ciudad-bolivar/>
- COLFUTURO. (2024). ¿Qué hacemos? <https://www.colfuturo.org/>
- Colombia Visible. (2025, junio 4). Biblioteca de la Creatividad: el laboratorio rural que transforma a cientos de jóvenes en Ciudad Bolívar. <https://colombiavisible.com/biblioteca-de-la-creatividad-el-laboratorio-rural-que-transforma-la-vida-de-cientos-de-jovenes-en-ciudad-bolivar/>

- Congreso Visible. (2022). *Informe sobre deserción escolar rural y urbana en Colombia*. Universidad de los Andes.
- El Colombiano. (2015, marzo 22). *El analfabetismo sigue afectando al campo colombiano*.
- El Colombiano. (2022, marzo 9). *Aumenta brecha académica entre colegios públicos y privados: estas son las razones*.
- El Espectador. (2025, abril 29). Él creó una biblioteca de la creatividad en Bogotá. <https://www.elespectador.com/economia/emprendimiento-y-liderazgo/el-creo-una-biblioteca-de-la-creatividad-en-bogota/>
- El País. (2025, diciembre 11). Iván Triana: potenciador de talentos y creador de futuros en Ciudad Bolívar. <https://elpais.com/america-colombia/branded/los-lideres-de-colombia/2025-12-11/ivan-triana-potenciador-de-talentos-y-creador-de-futuros-en-ciudad-bolivar.html>
- Evans, J. D. (1996). *Straightforward statistics for the behavioral sciences*. Brooks/Cole Publishing.
- Fernández, L. (2025). *La educación pública en América Latina: retos y perspectivas*. Oxford University Press.
- Fundación Bolívar Davivienda. (s.f.). Becas Talento. Proyecto Vida Jóvenes. <https://www.fundacionbolivardavivienda.org/programas/proyecto-vida-jovenes/becas-talento/>
- Guarín, A., Medina, C., & Posso, C. (2018). Calidad, cobertura y costos ocultos de la educación secundaria pública y privada en Colombia. *Desarrollo y Sociedad*, 1(81), 61–114.

- López, Á. R., Virgüez, A. F., Silva, A. C., & Sarmiento, J. A. (2017). Desigualdad de oportunidades en el sistema de educación pública en Bogotá, Colombia. *Lecturas de Economía*, 87, 165–190. <https://doi.org/10.17533/udea.le.n87a06>
- Martinis, P. (2020). *Financiamiento compartido y participación privada en la educación pública: El caso uruguayo*. *Revista Latinoamericana de Educación Comparada*, 12(1), 59–74.
- Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2008). Programa de Ampliación de Cobertura en Educación Secundaria – PACES. Bogotá: ICETEX.
- Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2022). *Alianzas público-privadas en educación* [Nota técnica]. Colombia: MEN.
- Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric theory* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Ortiz, M. (2024). *The State of Education in Latin America and the Caribbean 2023*. Inter-American Development Bank.
- Rodríguez, A., Ordóñez, D., & Hidalgo, M. (2021). *Factores socioeconómicos y rendimiento académico en Nariño*. *Revista Colombiana de Educación*, 81, 245–270.
- Sajida, & Kusumasari, B. (2023). Critical success factors of Public-Private Partnerships in the education sector. *Public Administration and Policy*, 26(3), 309–320. <https://doi.org/10.1108/PAP-11-2022-0127>
- Segura, L., Vásquez, A., & Rosero, N. (2024). *Equidad educativa en Colombia: desafíos y políticas recientes*. *Revista Educación y Sociedad*, 45(3), 301–322.
- Su, Y., & Gelman, A. (2023). *Who wants school vouchers in America? A comprehensive study using multilevel regression and poststratification*. *Social Sciences*, 12(8), 430.

- Suárez-Mesa, L., & Gómez, M. (2025). *Impacto del conflicto armado en la educación rural colombiana*. *Revista Colombiana de Estudios Sociales*, 28(1), 55–74.
- Takmazyan, A. S., Rukina, S. N., Samoylova, K. N., & Gerasimova, K. A. (2018). Public-Private Partnership in the Russian Educational System. *European Research Studies Journal*, 21(Special Issue 1), 479–485.
- Tilak, J. (2016). *Private participation in public education: A global perspective*. *International Review of Education*, 62(2), 189–211.
- Twinomuhwezi, I. K., & Herman, C. (2020). Critical success factors for Public-Private Partnership in universal secondary education: Perspectives and policy lessons from Uganda. *International Journal of Educational Administration and Policy Studies*, 12(2), 133–146. <https://doi.org/10.5897/IJEAPS2020.0656>
- UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report: Latin America and the Caribbean*. París: UNESCO.

Anexo

Anexo 1. Encuesta

A.1 Título de la encuesta

Percepciones sobre la educación básica y media en Colombia: acceso, calidad, equidad y rol del sector privado.

A.2 Introducción para los participantes

El instrumento inició con el siguiente mensaje dirigido a los participantes:

"¡Hola! Se agradece sinceramente su interés en participar en este estudio. Esta encuesta hace parte de una investigación desarrollada en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), cuyo objetivo es comprender cómo el sector privado puede contribuir al fortalecimiento de la educación básica y media en Colombia, mejorando el acceso, la calidad y la equidad del sistema educativo. La encuesta es completamente anónima y confidencial. Las respuestas serán tratadas de forma agregada y utilizadas exclusivamente con fines académicos. El tiempo estimado de diligenciamiento es de aproximadamente 5 a 8 minutos. Agradecemos de antemano su valiosa participación."

A.3 Ajustes metodológicos al instrumento original

Durante el diseño del instrumento se tomaron dos decisiones metodológicas relevantes que modificaron la estructura original planificada y que vale la pena documentar.

La primera decisión fue ampliar el público objetivo. El instrumento fue diseñado inicialmente para ser aplicado exclusivamente a jóvenes pertenecientes a la Generación Z en Colombia, bajo la premisa de que este grupo etario ha cursado o está cursando la educación básica y media en el período más reciente. Sin embargo, al momento de iniciar la distribución de la encuesta se tomó la decisión de abrirla a personas de todas las edades, con base en la

consideración de que las problemáticas de acceso, calidad y equidad en la educación básica y media han afectado a múltiples generaciones de colombianos. Incluir perspectivas de distintos grupos etarios enriqueció el análisis al incorporar experiencias educativas de diferentes momentos históricos del sistema educativo colombiano.

La segunda decisión fue la eliminación de las preguntas abiertas. En su versión original, el instrumento contemplaba 20 preguntas principales: 15 cerradas con escala Likert y 5 preguntas abiertas orientadas a capturar percepciones cualitativas de los participantes. No obstante, durante el proceso de distribución se evidenció que la presencia de preguntas abiertas aumentaba considerablemente el tiempo de diligenciamiento y generaba una mayor tasa de abandono de la encuesta antes de completarla, lo que ponía en riesgo el cumplimiento de la meta mínima de 200 respuestas válidas. Ante esta situación, se decidió eliminar las cinco preguntas abiertas y ajustar el instrumento a 14 preguntas cerradas, lo que redujo el tiempo estimado de respuesta y permitió alcanzar las 207 respuestas válidas que conformaron la muestra final. Esta decisión implicó que el análisis se enfocara exclusivamente en el componente cuantitativo, lo cual resultó suficiente para responder a los objetivos de la investigación.

Adicionalmente, durante el proceso de revisión y ajuste del instrumento se tomó la decisión de eliminar una pregunta del Bloque 2, relacionada con la percepción sobre la calidad docente, ya que se consideró que se traslapaba conceptualmente con otros ítems del mismo bloque y que su eliminación no afectaba la cobertura temática del instrumento. Con estos ajustes, el instrumento quedó conformado por 14 preguntas cerradas distribuidas en cuatro bloques temáticos.

A.4 Variables sociodemográficas

Con el fin de caracterizar a los participantes y permitir el análisis comparativo por grupos, el cuestionario inició con una serie de preguntas de caracterización sociodemográfica. Estas preguntas no hacen parte de los 14 ítems principales del instrumento, pero son fundamentales para clasificar y segmentar las respuestas de los participantes dentro de la muestra obtenida.

Edad. Pregunta de opción múltiple con los siguientes rangos: 15-20 años / 20-25 años / 25-30 años / 30-35 años / 35-40 años / 40 años o más. Los rangos fueron ajustados respecto al diseño original para reflejar la ampliación del público objetivo a personas de todas las edades.

Situación educativa actual. Se preguntó al participante: ¿Actualmente se encuentra cursando educación básica y media o ya se graduó de ella? Opciones: Soy estudiante de educación básica y media / Soy egresado(a) de educación básica y media / Ninguna de las anteriores. Esta pregunta permitió identificar si el participante tenía una experiencia reciente o pasada con el sistema educativo.

Tipo de institución educativa principal. ¿En qué tipo de institución cursó la mayor parte de su educación básica y media? Opciones: Pública / Privada / Ambas por periodos similares. Esta variable fue fundamental para los análisis comparativos realizados en la sección de resultados.

Área geográfica de la institución. ¿En qué tipo de área se ubica la institución donde cursó la mayor parte de su educación básica y media? Opciones: Zona urbana / Zona rural. Esta pregunta permitió explorar las diferencias de percepción entre participantes de contextos territoriales distintos.

Nivel socioeconómico del hogar durante la etapa escolar. ¿Cómo describiría el nivel socioeconómico de su hogar durante la mayor parte de su etapa de educación básica y media?

Opciones: Muy bajo o bajo / Medio-bajo / Medio / Medio-alto / Alto o muy alto. Esta pregunta se formuló desde la autopercepción del participante, lo que facilitó el análisis de equidad sin resultar intrusiva ni requerir información sensible.

A.5 Preguntas de contenido

El instrumento final estuvo compuesto por 14 preguntas cerradas organizadas en cuatro bloques temáticos que cubrieron las dimensiones centrales de la investigación: acceso, calidad, equidad y percepción sobre el rol del sector privado en la educación. Todas las preguntas utilizaron una escala Likert de cinco puntos, donde 1 correspondía a Totalmente en desacuerdo y 5 a Totalmente de acuerdo. Esta escala fue seleccionada por su amplio uso en investigaciones de percepción social y por su capacidad para capturar no solo la dirección sino también la intensidad de las opiniones de los participantes.

Bloque 1. Acceso a la educación básica y media (4 preguntas — P1 a P4)

Este bloque evaluó la percepción de los participantes sobre la igualdad en el acceso a la educación, la presencia de barreras económicas, la disponibilidad de instituciones educativas en su región y el conocimiento o experiencia con programas de becas y apoyos económicos. Su propósito fue identificar en qué medida los participantes consideran que el sistema educativo colombiano garantiza condiciones equitativas de entrada para todos.

En su comunidad, todas las personas tienen igualdad de oportunidades para acceder a una educación básica y media de buena calidad.

Las barreras económicas (como costos de matrícula, transporte o materiales escolares) representaron un impedimento significativo para usted o para personas cercanas en el acceso y permanencia en la educación básica y media.

La oferta de instituciones educativas (públicas y privadas) en su región fue suficiente y diversa para satisfacer las necesidades de aprendizaje.

Conoce o ha sido beneficiario(a) de programas de becas o apoyos económicos (públicos o privados) que facilitan el acceso a la educación básica y media.

Bloque 2. Calidad de la educación básica y media (4 preguntas — P5 a P8)

Este bloque indagó sobre la percepción de los participantes acerca de la calidad de la educación recibida, tanto en términos de su utilidad práctica para el proyecto de vida como en cuanto a las condiciones de infraestructura y dotación tecnológica de las instituciones. También exploró la valoración general sobre la calidad del sistema educativo colombiano y la percepción sobre la brecha entre instituciones públicas y privadas. La eliminación de la pregunta sobre calidad docente, contemplada en la versión original, obedeció a que su contenido se solapaba con los ítems restantes del bloque sin aportar información diferencial relevante.

La educación básica y media que recibió le proporcionó herramientas y conocimientos adecuados para sus metas académicas o profesionales futuras.

Su institución educativa contaba con infraestructura adecuada (aulas, laboratorios, bibliotecas) y recursos tecnológicos suficientes (computadores, acceso a internet) para favorecer el aprendizaje.

En general, la calidad de la educación básica y media en Colombia es satisfactoria.

Existe una diferencia notable en la calidad de la educación ofrecida por instituciones públicas frente a las privadas en Colombia.

Bloque 3. Equidad en la educación básica y media (3 preguntas — P9 a P11)

Este bloque exploró la percepción de los participantes sobre la igualdad de oportunidades educativas en función del nivel socioeconómico, el rol de la educación en la

reducción de brechas sociales y la comparabilidad de la calidad educativa entre zonas rurales y urbanas. Este bloque resultó ser el más crítico de toda la encuesta, con las valoraciones más bajas del instrumento, lo que refleja una percepción generalizada de inequidad estructural en el sistema educativo colombiano.

Las oportunidades educativas en Colombia son las mismas para todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico de origen.

La educación básica y media en Colombia contribuye eficazmente a reducir las brechas sociales y económicas entre las diferentes poblaciones.

Las instituciones educativas en zonas rurales y urbanas ofrecen una calidad educativa comparable.

Bloque 4. Percepción sobre la contribución del sector privado (3 preguntas — P12 a P14)

Este bloque identificó el nivel de conocimiento de los participantes sobre iniciativas del sector privado en educación, así como su valoración sobre la importancia de la participación privada y su respaldo a las alianzas entre el Estado y el sector privado como mecanismo de mejora educativa. Este bloque concentró los niveles de acuerdo más altos de todo el instrumento, lo que resultó significativo para los propósitos de la investigación.

Es consciente de programas o iniciativas de empresas o fundaciones del sector privado orientadas a mejorar la educación básica y media en Colombia.

La participación del sector privado es fundamental para mejorar la calidad y equidad de la educación básica y media en Colombia.

Las alianzas entre instituciones educativas públicas y el sector privado deberían ser incentivadas para fortalecer la educación básica y media en el país.

A.6 Cierre de la encuesta

La encuesta finalizó con el siguiente mensaje:

"Hemos llegado al final de la encuesta. Agradecemos profundamente el tiempo dedicado y la calidad de sus respuestas. Su contribución resulta fundamental para el desarrollo de esta investigación y para la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer la educación básica y media en Colombia. ¡Muchas gracias por su participación!"

A.7 Tipos de análisis realizados

La estructura del instrumento permitió llevar a cabo los siguientes tipos de análisis cuantitativos, todos ellos desarrollados en la sección de resultados de esta investigación.

Análisis de fiabilidad. Se calculó el coeficiente Alpha de Cronbach para los 14 ítems del instrumento, con el fin de verificar su consistencia interna antes de proceder con los análisis sustantivos. El valor obtenido fue de $\alpha = 0,629$, considerado aceptable para investigaciones exploratorias en ciencias sociales.

Análisis descriptivo. Se calcularon frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar para cada uno de los 14 ítems, segmentando los resultados según tipo de institución, área geográfica y nivel socioeconómico percibido. Este análisis permitió identificar tendencias generales y comparar el comportamiento de las cuatro dimensiones evaluadas.

Análisis comparativo. Se aplicaron pruebas no paramétricas para comparar las percepciones entre grupos de participantes. Específicamente, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para comparar dos grupos independientes y la prueba de Kruskal-Wallis para comparar más de dos grupos. Estas pruebas fueron seleccionadas por su adecuación al tipo de datos ordinales generados por las escalas Likert.

Análisis de correlación. Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre variables clave del instrumento, con el fin de identificar asociaciones relevantes para las hipótesis de la investigación. Adicionalmente, se construyó una matriz de correlaciones entre seis variables seleccionadas para explorar las relaciones entre las distintas dimensiones evaluadas.